-En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 15 días del mes de octubre del año 2013, siendo la hora 17:10, en la Sala de Comisiones de la H. Legislatura, se reúne la Comisión Especial de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia.

Sr. Presidente (Caponio).- Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Existiendo quórum, conforme lo señalan por Secretaría, damos por iniciada esta nueva reunión de la Comisión Especial de Reforma del Código Procesal Penal.

El temario del día ha sido circularizado. Doy una breve lectura:

“1) Modificaciones planteadas por el doctor Binder; comparación con el Código vigente.

2) Diagnóstico crítico de la situación actual de la Justicia Penal por los operadores del sistema:

Informe de representantes del Poder Judicial.

Informe de los representantes de los Colegios de Abogados.

3) Detección de los temas o materias de regulación y/o funcionamiento deficitario, ineficiente, ineficaz, asistemático y anacrónico. Conclusiones.

4) Designación de Asesores Ad-Honorem.”

Realmente, luego de la charla del doctor Binder y de la circularización del trabajo, los que hemos tenido la posibilidad de leerlo al mismo notamos que los objetivos de dicho trabajo son ambiciosos porque no solamente presenta una modificación normativa sino que creo que lo que más interesante que plantea el doctor Binder en su trabajo es la modificación del sistema del Poder Judicial en cuanto a las funciones y a la estructura del mismo, tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público de la Defensa, tomando como objetivo generar un sistema eficaz, eficiente y confiable de Justicia, un Ministerio Público Fiscal reorganizado, afianzar las garantías constitucionales del Proceso Penal, acercar la Justicia a la sociedad, facilitar el acceso a ella, dar respuestas claras y definitivas a la sociedad en cuanto a las transformaciones de la organización judicial en el Ministerio Público, el establecimiento de Audiencia en todas las etapas del procedimiento penal, realmente, tanto en la investigación penal preparatoria como en el Colegio de Jueces de Garantía y en el Colegio de Jueces por Jurado, las soluciones alternativas a los conflictos con el

tema de la mediación y el juicio abreviado, la optimización de la capacidad del sistema judicial. Creo que el trabajo que ha realizado el doctor Binder en el análisis, sobre todo de la jurisdicción de Concepción, nos da un panorama muy particular de cada uno de los problemas; y recién, por una pregunta a los doctores, creo que son problemas que difieren en cuanto al volumen y en cuanto a las jurisdicciones de Tucumán como de Concepción.

Estos son los desafíos que tenemos y la simplificación también del proceso penal. Realmente comparaba el Código Procesal Penal que tiene 564 artículos contra 72 artículos, que si bien es un bosquejo y un plan piloto y realmente los conceptos de desinformalización pueden ayudar a la administración de Justicia. Es un sistema que está contenido en pocas normativas que deja amplias facultades a todos los operadores del sistema. Si bien habrá puntos para revisar y discutir y charlar en cuanto a las funciones de cada uno de los operadores en las distintas etapas de procedimiento, yo creo que es un plan ambicioso y ojalá logremos ponerlo en funcionamiento con ayuda de todos.

Así que, para terminar esta alocución, nosotros, desde la Presidencia, hemos realizado una comparación del sistema actual con el plan piloto que vamos a circularizar para todos los miembros que es solamente a los efectos de una comparación de los mismos.

Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, la organización actual con diez Fiscalías de Instrucción, seis Fiscalías de Cámara, dos Fiscalías Correccionales, una Fiscalía de Cámara de Apelación en el Centro Judicial Capital. En cuanto al Centro Judicial Concepción, 4 Fiscalías de Instrucción, 2 Fiscalías de Cámara, 1 Fiscalía Correccional y el nuevo plan los concentra en un Fiscal Coordinador y en unidades que van a depender del Fiscal Coordinador que son Fiscalías de Respuestas Rápidas, de Delitos Complejos, de Litigación y oficinas administrativas. Creo que también es rescatable el concepto de liberar a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la tarea administrativa, desde crear oficinas administrativas, oficinas de audiencia, donde todo el control administrativo pasa por manos de ellos y liberan a los funcionarios de esa tarea engorrosa para hacer una Justicia más eficaz.

Así que damos por habilitada esta tercera reunión y cedo la palabra a los miembros del Poder Judicial, a los efectos de que brinden su informe, conforme lo establece el punto n° 2.

Va a hacer uso de la palabra el doctor Sánchez.

Sr. Sánchez.- Muchas gracias.

Deseo hacer unas aclaraciones previas.

Nosotros tenemos el trabajo elaborado, conforme a las especificaciones del Orden del Día, se hizo una adición de un párrafo muy breve en uno de los puntos, así que eso lo vamos a circularizar al texto completo con esa breve corrección que la vamos a dar a conocer ahora.

La opción, la alternativa nuestra es leerlo al informe directamente, son las diez páginas que había indicado el Orden del Día, así que lo que vamos a hacer ahora es leer, voy a leer gran parte del trabajo. La otra parte la va a leer el doctor Caramuti, vamos a ir explicando los puntos de análisis que hemos tenido, y si al final quieren puntualizar alguna cuestión, estamos a disposición para responder esas preguntas puntuales. Acá hay tres carpetas más por si alguien quiere tenerlas.

De todas formas va a ser circularizada por correo electrónico cuando adicionemos ese pequeño párrafo de aclaración.

“Se deja expresamente aclarado que las objeciones y críticas se refieren al funcionamiento de la Justicia Penal en su conjunto, como un sistema, pero sin personalizar. Queda a salvo, entonces, el trabajo, compromiso y esfuerzo cotidiano de magistrados, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados que día a día se abocan a su tarea con empeño y responsabilidad, dentro de las limitaciones y dificultades que presenta el sistema que se pretende reformar.

Respecto a la metodología utilizada para la elaboración del informe, se han seguido las categorías de análisis que provienen de los estudios llevados a cabo por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Hay todo un trabajo realizado a nivel latinoamericano sobre seguimiento de las reformas procesales penales, y esto ha permitido elaborar categorías de análisis para establecer cuáles son los puntos de funcionamiento crítico. En base a esas categorías está elaborado el informe que sigue a continuación:

Introducción:

No es posible evolucionar desde un sistema acusatorio meramente formal, con fuertes resabios o rémoras del sistema inquisitivo, hacia formas adversariales, si no se entiende que los procesos de reformas son multidimensionales y sus múltiples aspectos deben abordarse en forma conjunta para minimizar los riesgos de eventuales fracasos. Por ello el abordaje de un programa de reformas a la Justicia Penal, para profundizar el sistema acusatorio, demanda un triple enfoque desde: a) lo normativo; b) lo organizacional y c) lo cultural.

En nuestro caso, las críticas al sistema de Justicia Penal se reflejan directamente en el conjunto de prácticas de nuestro sistema judicial. Ese conjunto de prácticas, es decir el modo concreto en que se “hace justicia”, está conformada por la tradición, lo cultural. Y los códigos procesales han perdido fuerza normativa frente a la tradición, terminando por avalar o encubrir su funcionamiento deficitario; o aun retroalimentarlo.

Por ello, los cambios legislativos deben dejar de ser funcionales a esa tradición y a la estructura que la sustenta. Como consecuencia, debemos ser especialmente cuidadosos para que los cambios legislativos que se diseñen no sean funcionales a esa tradición y a la estructura que lo sustenta, sino que potencien su capacidad para instalar nuevas prácticas, por ejemplo, audiencias orales en la etapa preliminar, entre otras. Serán estas las que luego impulsarán la nueva configuración del sistema, en la medida en que se acompañen tales cambios con acciones de campo concretas, en especial la capacitación de los operadores para la vigencia efectiva de la normativa a través de las nuevas prácticas que ella promueve, evitando que las normas sean desvirtuadas por las “viejas prácticas” propias del sistema que se quiere desplazar. Esa es la función de los cambios legislativos.

Pero si las nuevas legislaciones no van acompañadas de múltiples acciones concurrentes, cualquier reforma estará destinada al fracaso, con el consiguiente riesgo de reforzar las viejas prácticas. Así, por ejemplo, será necesario adecuar y mejorar las escrituras edilicias, técnicas, informáticas, de filmación y grabación, etcétera, acorde a las nuevas prácticas que se quieren instalar, acotando resistencias de aquellos operadores consustanciados con aquellas viejas prácticas y temerosos respecto de la viabilidad real de la reforma propuesta. Además, aún dispuestos los cambios normativos, es necesaria la elaboración de un plan de seguimiento y evaluación constante de los resultados, para realizar los ajustes y correcciones necesarios para evitar los retrocesos del nuevo sistema penal instalado.

Debe, en definitiva, producirse un cambio de paradigma, y en este contexto la palabra “paradigma” significa esquema formal de la organización judicial y también un cambio de prácticas. Sin ese cambio de lógica, el sistema reformado correrá serio riesgo de retroalimentarse de la tradición inquisitorial.

Primero: La tradición inquisitorial.

Existen instituciones centrales del modelo inquisitorial contrarias al sistema republicano de administración de justicia que permanecen aun fuertemente arraigadas como resabios o rémoras en nuestro sistema acusatorio formal de primera generación.

Esto se advierte a nivel de ciertas normas procesales, una referencia completa podemos verla en el artículo 315 que promueve el secretismo propio del sistema inquisitivo, cuando dispone que el sumario podrá ser examinado por las partes y sus defensores, después de la declaración del imputado, a pesar de que el artículo 80 proclama que “toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra”. La pregunta obvia es ¿cómo hacer valer esos derechos del imputado antes de su declaración, si no puede acceder al expediente en todo momento?

La sola utilización de la palabra “sumario” es una clara reminiscencia de la cultura del expediente igual que la constante utilización de la expresión “instrucción” que permanece en muchas disposiciones, pese a la intención de reemplazar la denominación en esa etapa inicial del proceso por una más adecuada expresión “investigación preparatoria”, que la contextúa como auxiliar o accesoria de la etapa central y constitutiva del proceso penal en sentido propio que es el juicio.

También, a nivel de la organización judicial, tanto de los Tribunales como del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, se advierte, por ejemplo, a nivel de Tribunales funciones administrativas y jurisdiccionales en cabeza de los jueces, o la impropia delegación de facultades jurisdiccionales en el cuerpo de empleados que asiste a los magistrados, en el caso del Ministerio Público y de la Defensa la organización reflejo de los órganos judiciales.

A nivel de las prácticas es posible tener un dato a tener en cuenta, es que el Código Procesal Penal contiene un principio que promueve la oralidad en su artículo 133, pero la práctica forense ha desconocido su alcance general, cercenando su vigencia plena en todas las etapas, impulsando una praxis contraria, ya que en la investigación penal preparatoria se impuso la vigencia del escriturismo a través del expediente y su trámite, mediante la aplicación extensiva del artículo 135 y siguientes. Se dio preeminencia al acta por encima del acto. Y luego ese expediente proyecta su sombra sobre el juicio oral y público, conforme se expone más adelante en este trabajo.

En el ámbito de las prácticas es donde más se encuentra arraigada la tradición inquisitorial debido a que la cultura foral, tanto de los operadores judiciales como de los abogados litigantes, se apega a las prácticas conocidas y repele las nuevas formas y lógicas de trabajo. Lo que llamamos tradición inquisitorial es el conjunto de factores que condicionan fuertemente la actuación de estos actores. Estos factores son tanto prácticas internas como externas, a nivel estructural y de los operadores.

En segundo lugar: El escriturismo y la tramitación de casos mediante expedientes. Este es otro de los puntos que consideramos críticos en el funcionamiento de la justicia penal.

El expediente judicial, el sumario, o la causa es, como señalan los expertos en sistemas judiciales, un conjunto de prácticas provenientes de la tradición inquisitorial que conforman toda una estructura de funcionamiento.

Es lo que se denomina “la lógica del expediente” o “lógica del trámite”. Este expediente, auto, actuaciones o causa -todo lo contrario a un juicio- es tanto una realidad objetiva, corpórea, el cuerpo físico del expediente, como subjetiva -arraigada en la subjetividad, en la cultura de los operadores-. El expediente está tanto en el mundo exterior, por así decirlo, como en el espíritu de quienes lo fabrican día a día, por rutina, convicción o sin una clara conciencia de lo que están haciendo.

Punto 3: La llamada “lógica del expediente y la proliferación de las nulidades procesales.

La llamada lógica del expediente impacta negativamente en el juicio oral y público, fomentando prácticas distorsivas como la de la incorporación de pruebas por lectura en más casos de los debidos, el conocimiento previo del caso por los jueces de juicio a través de la lectura del expediente, lo que conlleva el riesgo de formación anticipada de opinión del caso, etcétera. También forman parte de esas prácticas distorsivas las conclusiones fiscales y aún de la defensa basadas, total o parcialmente en constancias escritas del expediente, antes que las pruebas mismas recibidas e incorporadas en la audiencia de juicio.

También forman parte de esas prácticas distorsivas las conclusiones fiscales y aún las de la defensa basadas, total o parcialmente en constancias escritas del expediente, antes que en la prueba misma recibida e incorporada durante la audiencia del juicio, fundamentos de sentencias con idéntico vicio, recursos de casación fundados de igual manera, etcétera. Prueba cabal de ello es la permanente utilización de la muletilla “las constancias de la causa, de autos o del expediente”, tan frecuente en distintos actos procesales y que incluso es común ver en los exámenes de los concursos de oposición para acceder a la judicatura o a la magistratura.

La fuerza estructurante de la tradición inquisitorial se manifiesta en el carácter sacramental de ese “expediente”, que debe ser custodiado, cosido, foliado, etcétera, como si fuera un objeto de culto; y las fallas en su mantenimiento (la falta de firmas, su pérdida, errores en la foliatura, etcétera) se consideran faltas graves en el funcionamiento de la justicia penal y causa de nulidades casi siempre insalvables.

Precisamente, la crisis de eficacia y eficiencia que provoca este “modelo” de trabajo basado en el escriturismo y la lógica del expediente, se hace evidente en las nulidades procesales, como una sanción al incumplimiento del rito. Es que esa lógica del expediente trae como consecuencia que tales nulidades han pasado a ocupar una posición central en los esquemas de defensa técnica, dejando en segundo plano la defensa técnica propiamente dicha, es decir aquella que trata de enervar la acusación en contra de sus defendidos. Esto tiende a degenerar en una práctica distorsiva que promueve una litigación indirecta, retrasando la resolución de los casos con planteos ajustados a cuestiones meramente formales (sacramentales) que, en puridad de conceptos, frecuentemente, nada tienen que ver con la garantía de la defensa en juicio, sino todo lo contrario: afectan más de una garantía constitucional, en especial a la duración razonable del proceso.

4. El enjuiciamiento oral y público: La praxis del juicio oral exhibe un notorio menoscabo a los principios que pretenden asegurar su carácter oral y público. El sistema requiere de jueces imparciales (que no conocen previamente el caso ni lo han leído con anterioridad en el “expediente”), que atienden el litigio con inmediación y de un modo concentrado (no separado en decenas de audiencias que fraccionan la producción de la prueba o la “escriturizan” mediante incorporaciones “por lectura” del expediente); requiere acusadores –es decir fiscales y querellantes- que han preparado el caso y pueden presentar la prueba de cargo en ese juicio, tomando sobre sí el deber de probar (y no el juego de presunciones encubiertas); requiere imputados que han tenido tiempo de preparar su defensa y cuentan con adecuado asesoramiento técnico y respecto de los cuales se presume su inocencia y son tratados como tales hasta que se pruebe lo contrario y ello sea declarado mediante sentencia posterior al juicio.

Urge garantizar la plena vigencia del juicio oral, hacer todo lo posible para que su realización no se vea afectada por deficiencias administrativas, por ejemplo, notificaciones tardías, superposiciones de audiencias respecto de las partes -fiscales y/o defensores-, etcétera; monitorear su evolución y sostenerlo políticamente para que extienda sus efectos sobre las demás prácticas y hábitos de los operadores judiciales.

Para que ello sea posible es necesario, paralelamente, extender el sistema de audiencias para la adopción de cualquier decisión judicial, aun durante la investigación penal preparatoria y establecer criterios generales y prácticas concretas de selección racional de los casos que deben llegar a juicio y los que deben ser derivados a soluciones alternativas del conflicto que subyace al delito, lo que será abordado en los puntos siguientes.

5. Investigación penal preparatoria escrita y la duración del trámite. Privación del contradictorio suficiente. Ausencia de audiencias orales y oralización de los recursos:

Mientras la investigación penal preparatoria (IPP) del juicio se mantenga bajo la forma y la lógica de la “instrucción y el expediente”, el juicio oral y público adolece de los problemas mencionados precedentemente, en especial la duración del trámite, con seria y grave incidencia en la garantía de duración razonable del proceso y demás garantías relativas al acceso a la justicia, a la defensa en juicio y tutela judicial efectiva, tanto para el imputado como para la víctima.

Un dato a tener especialmente en cuenta es la ausencia de contradictorio suficiente durante la investigación penal preparatoria, pues el trámite escrito debilita y prácticamente neutraliza la contradicción, reemplazándola por un deficiente sistema de vistas y traslados de los planteos y peticiones escritas de las partes entre sí, donde éstas no interactúan directamente ante el juez, sino que lo hacen en forma indirecta a través de sus escritos, sin la dinámica de la discusión directa e inmediata en audiencia oral. Esto solo contribuye a debilitar el sistema de garantías del proceso penal, pues, por ejemplo, este “trámite escrito” fomenta prácticas dilatorias mediante la utilización de planteos inadmisibles o improcedentes y sus posteriores vías de impugnación (recursos), sin que se apliquen correctivos de ningún tipo para evitar o disuadir tales modalidades espurias de litigación indirecta.

Asimismo, el sistema actual de tramitación de los recursos siguiendo la misma lógica del expediente, sumado a la existencia de una Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción única para toda la Provincia, implica una duración promedio de no menos de cuatro meses. Este es un dato que corresponde a una consulta informal realizado a los abogados del foro, porque no hay una estadística que mida tiempos, en el Poder Judicial, en la resolución de un recurso, duplicando, a veces, el plazo teórico de la investigación penal preparatoria. Un factor de directa incidencia en esta materia lo constituye el volumen de casos que ingresan al único tribunal de apelación de la Provincia desde los tres Centros Judiciales existentes.

Para un sistema pleno y sin ambigüedades, de enjuiciamiento oral y público, es necesaria la utilización masiva de la oralidad y la publicidad en todas las etapas, erradicando la lógica del expediente durante la investigación penal preparatoria, mediante la implementación de audiencias preliminares, iniciales, incidentales, conciliatorias, de control general, de control de acusación, de medidas cautelares, de control de detención, etcétera, como así también la oralización y la incorporación del litigio en audiencia como trámite del recurso y no el sacramental y generalmente

sustituido “informe *in voce*” según faculta la norma procesal vigente. Esto no significa eliminar las actuaciones escritas en lo que sean estrictamente necesarias, sino solo la lógica del trabajo a través del expediente.

Punto 6: Déficit de la gestión de la conflictividad social. Flujo de casos y selectividad del sistema y el desgaste jurisdiccional en el trámite. Ausencia de mecanismos de reparación y conciliación. Utilización tardía de mecanismos de resolución de casos, Probation y Juicio Abreviado y Distorsión del procedimiento en casos de flagrancia.

El sistema actual fue estructurado en torno al concepto clásico de legalidad en el ejercicio de la acción penal, generando uno de los problemas más evidentes en el funcionamiento de la Justicia Penal de Tucumán: el colapso y la crisis de eficiencia en la gestión de la conflictividad de casos penales. Felizmente, ese modelo procesal, a nivel teórico, ha sido superado tras veinte años de discusiones doctrinarias, postulándose sistemas a favor de la incorporación de criterios de oportunidad en la legislación procesal.

En nuestra realidad, persisten aún las deficiencias provenientes de la aplicación de un sistema procesal de legalidad, las estadísticas de ingresos de casos al fuero penal del Poder Judicial, señalan un constante aumento cuantitativo de casos.

El análisis del tipo de casos que ingresan a nuestro sistema, muestra un variado abanico de casos que, claramente, no son casos penales, por ejemplo, extravíos de cheques, dentelladas de canes, sus lesiones. Sin embargo el sistema los computa para su ingreso al fuero, sin posibilidad de depurarlos, *ab initio*, del sistema. Ocurre igual con hechos que no reúnen los requisitos de algún tipo penal determinado.

En otros casos, los hechos que se denuncian son insignificantes o de ínfima lesividad. Y en muchos casos, se advierte inicialmente la imposibilidad de obtener pruebas que permitan ir a juicio y sostener una acusación seria y fundada, no hay testigos ni otros medios de prueba que puedan respaldar los dichos de la víctima, o que, aún siendo posible, la realización del juicio y la aplicación de la sanción distan de ser el mejor abordaje al conflicto, el que puede procesarse o solucionarse más satisfactoriamente mediante otras medidas alternativas.

La obligación de investigar todos los casos colapsa el sistema, pues no existe en el mundo una agencia estatal capaz de investigar todo lo que se denuncia, sea o no delito, y la pretensión de tenerla genera serios riesgos para los derechos y garantías de todos. Esto provoca que el sistema recurra a una práctica de utilización distorsiva del archivo, sin controles eficientes que eviten la arbitrariedad de su utilización. Ello a su vez, acarrea un efecto simbólico socialmente deslegitimante de la Justicia Penal, bajo la idea de la impunidad, especialmente respecto de casos graves o que se vinculan con

presuntos delitos supuestamente cometidos al amparo del poder.

Asimismo, la ausencia de respuestas alternativas al conflicto penal, impide una selectividad racional en base a múltiples posibles soluciones al conflicto, atendiendo a sus características y protagonistas concretos. Esto se hace evidente en la ausencia de una política de persecución criminal, que debiera diseñarse desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal, en coordinación con los demás poderes del Estado.

Usualmente, las instituciones judiciales no prestan atención al resultado de su accionar porque les alcanza con cumplir con las rutinas y fórmulas. Tal como señalan los expertos en sistemas judiciales, frente a sistemas judiciales sobrecargados endémicamente y de los cuales la cantidad de casos sin respuestas es abrumadora, la introducción de respuestas alternativas al conflicto penal, reparación, conciliación, etcétera, es una de las respuestas de mayor calidad del sistema, produce grandes efectos en términos del servicios a las personas, de confianza y de legitimidad al Poder Judicial, además de colaborar con el control de la sobrecarga de trabajo, le permite redirigir esfuerzos para abarcar otras tareas que no pueden ser afrontadas del modo actual y a cuyo respecto la ciudadanía reclama respuestas eficaces.

Otro problema serio lo constituye el uso tardío de los institutos de la suspensión del juicio a prueba y del juicio abreviado, principal (aunque no exclusivamente) pensados como una herramienta de descongestión del sistema. En la realidad, su uso se posterga hasta pocos días, cuando no horas previas a la audiencia de debate, desnaturalizando una de las finalidades que justificaron su incorporación al sistema como una “respuesta alternativa” al juicio oral y público. Esto implica que las oficinas judiciales deben cumplir todo el “trámite” casi hasta la audiencia misma de debate, el que finalmente se suspende, “perdiendo” la fecha agendada para el juicio, con lo cual lejos de descongestionar el sistema, contribuye a su colapso. El uso temprano no sólo garantizaría el cumplimiento de esa finalidad que justificó su adopción en el sistema, sino también una más pronta solución alternativa del conflicto, cuando ello fuera posible, constitutiva de otra de las grandes finalidades de su previsión normativa.

D) Finalmente, respecto de los procesos en flagrancia, la introducción de un procedimiento con plazos breves (de carácter sumario) en la práctica tiende a desnaturalizarse como consecuencia de las prórrogas al plazo de investigación y hasta la ordinarización de los plazos. Se advierte también un fuerte rechazo desde el ejercicio de las defensas técnicas (tanto pública como privada), al procedimiento en flagrancia y sus reglas de utilización temprana de la suspensión de juicio a prueba y del juicio abreviado. No hubo criterios jurisprudenciales que fortalecieran este procedimiento,

sino que, al contrario, demostraron fuerte resistencia a las reglas del procedimiento en flagrancia.

Por otra parte, otro modo de desnaturalizar esta modalidad de procedimiento que ha podido observarse, es el recurso a prácticas policiales fraguadas de falsas actas de inexistentes flagrancias, que terminan desenmascaradas en el juicio oral, pero al precio de arbitrarias y a veces no breves prisiones preventivas y desconfianza de acusados, víctimas y la ciudadanía en general, respecto del real funcionamiento del sistema y de la Justicia Penal, contribuyendo a su creciente desprestigio.

6. Deficiente participación de las víctimas.

Una característica que se repite en nuestro sistema judicial penal es que por haberse configurado “*desde la acción pública y supuestos intereses generales de tipo abstracto*”, se dejó de lado la participación real de la víctima, se desentendió de sus problemas e intereses concretos y abandonó la adopción de la idea de “*gestión social*” de bienes públicos. Tampoco se le asegura la debida atención e información, el acceso a la asesoría legal, medidas de protección ni mecanismos de reparación en concreto.

Este déficit responde a una concepción general del Derecho Penal construida sobre la percepción del delito como desobediencia al orden estatal, más que como conflicto y lesión o peligro de lesión de derechos de personas concretas, concepción que también debe ser revisada porque es la que sustenta, desde el derecho de fondo, el proceso penal inquisitivo, así como el acusatorio meramente formal. El sistema adversarial o acusatorio puro, en cambio, responde (o debe responder) a una concepción del delito como conflicto y lesión de derechos con protagonistas concretos, a cuya solución y reparación el sistema penal debe responder como recurso de última ratio.

7. Duración excesiva del trámite. Quebranto de los tiempos procesales. El funcionamiento de la Justicia Penal no se ajusta a los plazos impuestos por la Ley Procesal y carece de controles efectivos del tiempo.

Aunque la letra del Código Procesal Penal refiere que en el proceso penal los plazos son perentorios, la jurisprudencia ha sentado un criterio opuesto, al establecer el carácter meramente ordenatorio de ciertos plazos. Puede verse a diario que el incumplimiento de todos los plazos no produce consecuencias o al menos no produce consecuencias graves, incluso cuando se trata de los plazos previstos para resguardar la libertad.

La carencia de control de la variable temporal (duración del proceso) produce un efecto negativo, dando lugar al litigio indirecto, el litigio sobre las formas, el abuso de los planteos de nulidad y desplazando del sistema o minimizando la discusión de fondo.

8. Déficit de eficacia en la gestión de las funciones. Existe una fuerte tendencia del sistema a no prestar atención a sus condiciones de eficiencia y de eficacia. Ello se advierte en la imposibilidad de aumentar la cantidad y la calidad de las respuestas de la Justicia Penal a las peticiones de las víctimas, existiendo una tendencia a no atender sus percepciones y problemáticas concretas y a percibir las como una molestia para el funcionamiento del sistema. Con frecuencia, no existe en los operadores judiciales y del Ministerio Público una predisposición sincera a escucharlas con apertura y se tiende a verlas como solo interesadas en la venganza y en obtener las penas más severas.

Por el contrario, la experiencia de las audiencias de suspensión de juicio a prueba, permite apreciar que sus pretensiones no son siempre irracionales y que es posible obtener con su participación soluciones más genuinas y eficaces al conflicto, al menos, en los casos de criminalidad leve y media.

Es evidente que el incremento de personal administrativo, funcionarios de ley, secretarios, prosecretarios, ayudantes de fiscal, ayudantes de defensor y relatores, no ha impactado como una solución real al problema. Y la incorporación de técnicas de gestión de calidad ha provocado una mejora parcial y débil al funcionamiento del sistema.

Tampoco el doble turno de trabajo es una solución, sino que ha intensificado las prácticas propias de la tradición inquisitorial en la que cada instructor actúa como un *minifiscal* y cada empleado de juzgado ejerce una indebida e impropia delegación de la función jurisdiccional.

Rigidez en la organización jurisdiccional y en las prácticas procesales de los operadores:

La estructura vertical y jerarquizada de organización jurisdiccional es una de las características principales del sistema inquisitorial. La principal crítica radica en la notoria confusión entre funciones netamente jurisdiccionales con funciones administrativas cuyo ejercicio llevan a cabo los jueces.

Adviértase que se privilegia la idea de un juez que gestiona administrativamente su oficina, el denominado juez gerente, ocupándose de materias ajenas a su función de juzgar, como ser: la organización de la oficina, gestión administrativa del trabajo, dirección y supervisión del personal, que consumen gran parte de su tiempo en desmedro de la función jurisdiccional propiamente dicha, que debería centrarse en la recepción y dirección de las audiencias, adopción y fundamentación de las decisiones de los conflictos a que se sometan las partes previa a oír a las mismas.

Esta distorsión del sistema tiende a favorecer, dentro de la lógica del trámite de los expedientes, la delegación de funciones jurisdiccionales hacia los empleados y funcionarios del juzgado, quienes se encargan de redactar providencias, decretos, resoluciones y sentencias que el juez controla y firma, adquiriendo solo un conocimiento indirecto del litigio a través de sus colaboradores.

Cuando se intentan mejoras en este modelo organizacional, se piensa en términos de nombrar más empleados, preferentemente abogados, que colaboren con el juez, en vez de nombrar específicamente más jueces que ejerzan ellos mismos su función natural.

El modelo de organización vigente en Tucumán fomenta este esquema distorsivo de funcionamiento en la que el juez se ve obligado a la gestión administrativa o gerenciamiento de su oficina, a través de la cual construye una noción de poder endogámico, -el poder del juez se vincula a la fortaleza de su oficina en términos de gestión de recursos- y lo aleja de su verdadera función, se viene la audiencia, se toma una decisión y se fundamenta la sentencia.

Además, este modelo tradicional de organización judicial es sumamente costoso, pues para aumentar el número de jueces, -lo mismo pasa con fiscales y defensores-, deben crearse unidades judiciales completas, designando funcionarios y empleados que asisten exclusivamente a ese nuevo magistrado. No existe una forma o modelo de democratización del Poder Judicial, donde prime la polifuncionalidad de los jueces, la existencia de múltiples formas de integración de los tribunales, etcétera.

Tampoco se ha organizado un modelo donde se separe claramente la función jurisdiccional de la gestión administrativa de soporte a la labor de los jueces, preservándolos para el ejercicio exclusivo de la función jurisdiccional, quedando la gestión administrativa bajo la responsabilidad de un funcionario diferente.

Esto, a su vez, impacta respecto de las medidas administrativas necesarias para la organización del juicio, porque en el esquema actual el funcionamiento del sistema por la falta de una organización administrativa que resuelva los problemas de concentración de recursos humanos y materiales en una fecha y espacio determinado con precisión, debiendo ocuparse los jueces de este tema.

Los defectos de organización administrativa, que parecen menores o que no se les asigna el carácter de problemas procesales, son precisamente uno de los principales ataques que se realizan desde la tradición inquisitorial al juicio oral.

Por ello la creación de un adecuado sistema de gestión administrativa que dé soporte a los jueces y tribunales específicamente orientados en la realización del juicio oral, es un tema ineludible para sostener esta principal estructura dentro de los sistemas procesales.

Una reflexión especial respecto de la centralidad del juicio y del sistema de audiencias para la adopción de todas las decisiones judiciales en el proceso penal, merecen el rol que deben cumplir en el cambio cultural los cuerpos profesionales no jurisdiccionales que actúan en la órbita del Poder Judicial.

El cambio de mentalidad también debe alcanzarlos tomando conciencia de su papel auxiliar respecto de la función básicamente jurisdiccional que desempeña este Poder.

Todo el diseño de su tarea debe dirigirse a fortalecerla, así como a tornar operativa las características del modelo adversarial, comenzando por las necesidades edilicias de salas de audiencias y las técnicas de registro digital e informático a través de la filmación y grabación de los juicios y audiencias.

El serio déficit que tiende a colapsar el funcionamiento de los Tribunales de Juicios, Cámaras Penales y Juzgados Correccionales, es la función de control de ejecución de la pena y de las reglas que se imponen con motivo de las suspensiones de juicio a prueba.

Pese a estar prevista una jurisdicción especializada, jueces de ejecución de sentencia, su falta de cobertura mantiene el esquema original en cabeza de los Tribunales de Juicios con la sobrecarga de trabajo que ello implica. A este respecto no puedo dejar de señalarse también el déficit normativo de competencia, pues se mantiene de hecho en cabeza de los Tribunales de Juicios esta tarea sin una expresa norma ni siquiera temporaria que se las asigne.

Obsérvese que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye esa competencia a los jueces de ejecución –artículo 65- y a las Cámaras Penales solo el juzgamiento de los delitos en su competencia material, sin prever su intervención en la intervención de la pena, siquiera hasta que pongan el funcionamiento de los jueces de ejecución penal.

Algo similar observamos respecto de los Juzgados de Instrucción y la competencia actual en materia contravencional, en grado de apelación, cuya competencia específica corresponde a los jueces contravencionales –artículo 66- creado por ley, pero nunca designados ni puestos en funcionamiento.

MODELO ORGANIZACIONAL ANACRÓNICO Y DISFUNCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

El rango general más evidente es que el papel del fiscal sigue ocupando simbólicamente el viejo lugar del procurador del rey, propio de la tradición inquisitorial como gestor de intereses públicos o más propiamente estatales, sin ocupar el rol institucional constitucional como un verdadero abogado de las víctimas. El modelo imperante refleja el arquetipo más básico y tradicional del Ministerio Público dentro del sistema inquisitivo.

En Tucumán, el diseño del Ministerio Público Fiscal a nivel constitucional es nulo, se limita a ubicarlo dentro del Poder Judicial, pero sin dotarlo de autonomía funcional ni autarquía financiera ni organizar una jefatura bicéfala, separando al Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Popular o de la defensa a diferencia de la Constitución Nacional. Tampoco hubo avance a nivel jurisprudencial en la materia pese a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "*Fallo Quiroga*", entre otros.

El Ministerio Público Fiscal fue diseñado siguiendo el modelo organizacional de los Tribunales donde se hace evidente la falta de coordinación de esfuerzos. La burocratización, la insuficiencia de la responsabilidad frente a los resultados, la ausencia de criterios políticos criminales, etcétera, en gran medida como consecuencia de la preeminencia del trámite por medio del expediente que refleja material del sistema inquisitorial y emanación de su espíritu y su cultura.

Esa falta de coordinación, en desmedro del principio de nulidad del Ministerio Público, se observa incluso entre el fiscal que interviene la investigación y el que debe hacerlo en el juicio oral, donde suele observarse, por ejemplo, elementos de convicción secuestrados que no fueron peritados por aquel, por el fiscal de la investigación penal preparatoria, y se los ofrece como prueba para el debate sin proponer la realización de la pericia por vía de investigación suplementaria u otras situaciones similares, especialmente en materia de reconocimiento en rueda de personas, entre otros.

Esto termina muchas veces en absoluciones que después generan la crítica de supuestas sensaciones de impunidad.

No existen tampoco acciones dirigidas a fortalecer la idea de un fiscal que debe ayudar a las víctimas especializándolo por materia o tareas específicas y fortalecer el principio de tutela judicial efectiva como manera de desplazar el viejo postulado de los sistemas inquisitoriales donde todos son "auxiliares de la Justicia" y donde es el propio sistema procesal el que expulsa a los protagonistas reales del conflicto y a quienes han

sufrido el principal daño o, en todo caso, los ha utilizado como excusa para ejercer su propio poder estatal pero no para solucionarles el conflicto.

Cuanto más víctimas haya, menor es la eficacia del Ministerio Público Fiscal y cuando la víctima tiene un interés o un daño concreto, los fiscales se desentienden de tales intereses. Este déficit en el diseño, funcionamiento y actuación del Ministerio Público Fiscal menoscaba su legitimación social. Si los representantes del Ministerio Público Fiscal se tomaran en serio la atención de los intereses de la víctima, tal vez la importancia que hoy se asigna a la necesidad de fortalecer un rol autónomo del querrelante perdería parte de su relevancia.

Otro aspecto, no menor, es el relativo a la falta de estructura de Asistencia Técnica Pericial propias para el Ministerio Público Fiscal, bajo su órbita y dependencia funcional directa, y las menguadas capacidades de investigación criminal por carecer de una estructura especializada al respecto, la llamada Policía Judicial.

Finalmente, no existe una dinámica de trabajo clara con la Policía, e incluso se sigue considerando a la prevención del delito como totalmente ajena al rol del Ministerio Público y solo exclusiva de otros poderes del Estado.

Debilidad del sistema de Defensa Pública: Como secuela de la tradición inquisitorial, nuestro sistema de Defensa Pública también exhibe dificultades organizacionales y de medios y recursos con directa incidencia en la eficacia de la defensa penal, debido a la inexistencia del proclamado principio de la “paridad de armas”.

La principal objeción es su integración al Ministerio Público Fiscal y bajo la dirección de un mismo superior jerárquico. Además, la Defensa Pública es también una organización “reflejo” de los órganos jurisdiccionales, modelo este que no se adapta a las necesidades de su función específica. Esa organización es rígida y entorpece la distribución del trabajo conforme a una política general que tampoco está diseñada ni parece que podrá estarla mientras se mantengan unificados el Ministerio Público Fiscal con el de la defensa, bajo la denominación del primero. No pueden las dos partes del proceso y del juicio tener la misma cabeza.

La gran mayoría de los imputados son personas de escasos recursos económicos y sin posibilidad de nombrar un defensor privado. Esto implica un número elevado de casos que demandan la intervención de la Defensa Pública, colapsando su capacidad de respuesta frente a los casos y juicios. Las causas de este colapso se deben, en gran medida, a la misma lógica que afecta el funcionamiento de las fiscalías, la gestión de la conflictividad social a través del flujo de casos que ingresan al sistema y la ausencia de respuestas alternativas ya mencionadas, que permitirían una gestión diferente en la defensa de los intereses de los acusados.

Asimismo, la carencia de medios para la investigación de sus casos, sumado a la ausencia de mecanismos de cooperación y colaboración de los recursos sociales de otros actores institucionales, así como la necesidad de tener que recurrir al Fiscal a cargo de la investigación preparatoria para proponerle las diligencias probatorias que estima indispensables y oportunas para la defensa, postergando la posibilidad de recurrir al juez solo una vez denegadas y revelada su estrategia defensiva.

No están previstos mecanismos de soporte que permitan asegurar una defensa técnica efectiva cuando el número de casos ingresados a la Defensa penal torne imposible su ejercicio pleno por los defensores públicos. No se han instrumentado tampoco modelos o esquemas de defensa mixta en ninguna de sus formas. Es decir, derivación a los Colegios de Abogados de defensas también en casos de pobreza.

A propósito, existe además una limitación ya que el Colegio de Abogados tiene un consultorio de defensa gratuita pero están excluidos expresamente los casos penales de ese sistema.

Sr. Presidente (Caponio).- La propuesta es que se lo incluya.

Sr. Caramuti.- Es una alternativa, este es un diagnóstico de situación, si bien hay algunas propuestas la tratamos, este es un diagnóstico de cuál es la situación a propósito de la relación entre la administración de justicia, la práctica de la abogacía y las reformas al Sistema de Justicia.

Con respecto al escriturismo, este es un párrafo que no está en el documento que hemos circularizado, porque en los intercambios y todo lo demás, se quedó sin incorporar.

El escriturismo enraizado en la práctica concreta de la investigación fiscal, puesta en cabeza de los representantes del Ministerio Público Fiscal, y la consiguiente necesidad de los señores defensores de realizar al mismo las peticiones, propuestas de diligencias probatorias, etcétera, hasta el pedido de sobreseimiento se la tiene que hacer al fiscal, porque el fiscal tiene que pedir el sobreseimiento y no directamente el defensor. Con la consiguiente limitación formal del acceso directo al juez, salvo los casos de oposición legalmente previstos, artículos 344 y 347 y concordantes del Código Procesal; frecuentemente interpretados además con criterio restrictivo, pone en entredicho el pregonado postulado de igualdad de armas como característico del sistema acusatorio.

Estimamos que ello podrá ser solucionado o al menos amenguado con el amplio sistema de audiencias durante la investigación, que garantiza que toda petición tanto de

la acusación como de la defensa, sea formulada directamente ante el juez y resuelto por el mismo, previo amplio contradictorio de todas las partes, en audiencia.

La práctica de la alevosía es más que un reflejo de los sistemas judiciales, son a veces parte inescindible de muchos de sus problemas y también de sus vicios. Consideramos que en este punto corresponde a los colegios profesionales poner de manifiesto la situación. Si bien no le corresponde al abogado particular sacrificar los intereses de sus clientes en aras de la reforma del sistema –y ello es correcto-, de ello no se puede inferir que en consecuencia no se deban tomar medidas correctivas en los casos de un adecuado ejercicio profesional.

Déficit en la participación ciudadana:

No existe en nuestro sistema judicial un mecanismo de participación ciudadana real y efectiva. Un modelo de justicia exclusivamente profesional (por técnicos) ha estado ligado tradicionalmente al modelo inquisitorial. A su vez, implica el incumplimiento del mandato constitucional del *juicio por jurados*, cuya implementación a través de alguno de sus posibles modelos debe ser objeto de meditación y de debate.

Déficit de información pública:

Se advierte, asimismo, la ausencia de una política de información pública que transparente los aspectos centrales del funcionamiento del sistema de Justicia Penal, tanto generales, estadísticas, estudios cualitativos, etcétera, como particulares, respecto de casos determinados, cuya trascendencia social exija una información clara y precisa. Ese es, en síntesis, el panorama que hemos pretendido...

Sr. Sánchez.- Vamos a agregar una pequeña información extra a este informe que lo habíamos previsto como anexos, y esta información es útil, a tener en cuenta al momento que nosotros entrar a tratar, ya en el fondo del debate, las posibles reformas.

En primer lugar, Inecip que fue el organismo que asesoró al Poder Judicial, no hizo un informe de base, porque no formó parte del convenio que lo vinculó al Poder Judicial, sino que el Poder Judicial brindó la información que tenía disponible. Sobre esa información disponible se construyó ese modelo que se propuso como plan piloto.

Y en esa experiencia, pudimos advertir que las diferencias que existen entre los centros judiciales que hay en la Provincia, es una diferencia de escalas, básicamente los problemas que advertimos en el Centro Judicial Capital, se repiten en el Centro

Judicial Monteros y en el Centro Judicial Concepción, es la cantidad, la escala, el volumen es lo que varía, pero básicamente los problemas son exactamente los mismos.

Por esa razón hacemos esta referencia con respecto a la extensión y a la distribución territorial a la población, al índice o tasa de criminalidad y a la existencia de estructuras o instituciones estatales, es diferente a nivel de escala simplemente, no generaría mayor problema en caso de que se pensara en una aplicación gradual de los planes de reforma.

En el año 2011, se llevó a cabo una serie de jornadas y eventos académicos, algunos de ellos en el Colegio de Abogados, donde se invitaron a personas para conmemorar los veinte años de la Reforma Procesal Penal, y en esa época hubo algunos medios periodísticos, incluso que reflejaron este momento, y de eso, surgieron una serie de críticas al procedimiento de reforma del año 1991, sobre los resultados que se habían obtenido en aquel momento.

Algunas críticas que se hicieron fueron señaladas por algunos expertos como la doctora Ángela Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal, el doctor Alberto Binder, el doctor Pedro Roldán Vázquez, catedrático de la U.N.T., el doctor Eudoro Albo también tuvo oportunidad de exponer al respecto, y se señalaban estas objeciones a aquel primer proceso de reforma. Primero, la escasez de capacitación judicial que fue hubiese sido conveniente que acompañe a aquel proceso, la escasez de medios para adaptar la infraestructura del esquema escriturario a las necesidades del juicio oral. Se mantuvieron las estructuras básicamente iguales, solo hubo un cambio de roles y el fiscal de Instrucción pasó a ocupar el lugar del juez de Instrucción, sin provocar una reforma o una modificación real a los modos de trabajar.

Escasez de designación de nuevos magistrados y fiscales, esta información, si las desarrollamos, está más adelante en este anexo. Advertimos que en estos ya casi veintidós, para veintitrés años de vigencia del sistema en la Provincia de Tucumán, en el Centro Judicial de Monteros, un juzgado de instrucción más, una fiscalía penal más, un defensor penal más y un defensor de menores que, por ser fuero penal, solo actúa en casos de menores en conflicto o menores víctimas y como verán el crecimiento del número de unidades judiciales es mínimo, es solamente cinco. Se mantiene el número de fiscales en el Centro Judicial Capital, se mantiene el número de fiscales en Centro Judicial Concepción, también de Defensores, también de jueces de Cámara, la estructura no ha crecido para nada.

Segundo: Sistema de Contención del delito rebasado por insuficiencia de estructura. Esto consolida el concepto anterior, no está la estadística disponible pero en

los estudios que se hicieron previamente, se advierte que desde el año 1991 hasta el año 2011, el crecimiento había sido de 10.000 causas ingresadas por año a la Justicia Penal de Tucumán, a un ingreso aproximado en toda la provincia, que rondaba los 54.000 casos. O sea, se pasó de 10.000 a 54.000 con una estructura judicial prácticamente idéntica, solamente, como les decía, se incrementó el Centro Judicial Monteros con estas cinco unidades.

Hubo aumento de densidad demográfica, lo que a su vez trae aparejado el aumento de la conflictividad social, descrédito a la Justicia, provocado por todos estos problemas que acabamos de enumerar, con un fuerte espíritu de autocrítica desde el Poder Judicial y, obviamente, esto aparejó la llamada “sensación de inseguridad”, no vamos a debatir aquí sobre el concepto de la sensación de inseguridad, pero esto fue creciendo a medida que estos problemas se fueron acentuando en el funcionamiento de la Justicia Penal y en la falta de respuestas a esa demanda social de justicia.

Esto generó, obviamente, lo que está puesto en el punto cuatro como “deslegitimación del sistema” y esa deslegitimación, llevó a una consecuencia: el reclamo social afín a la mano dura, que en algunos casos lo vimos reflejado a nivel nacional como el efecto “Blumberg”. Ustedes recordarán que provocó el endurecimiento de muchas penas, o el pedido de modificar la edad de los menores punibles, una serie de efectos a nivel de la legislación nacional y también, obviamente, provincial.

Y en veinte años, y esto es un dato a tener en cuenta, hubo veinte reformas parciales del sistema de Justicia Penal, en veinte años hubo, más de veinte reformas al sistema de Justicia Penal.

Sr. Vargas Aignasse.- La cuestión de fondo, digamos.

Sr. Sánchez.- No, en el procesal penal.

En la Provincia solamente cambiamos el Código, el Código Procesal Penal, tiene veintidós reformas, en veintiún años, tiene veintidós reformas, están contadas. La información también está disponible, todas las leyes que han ido haciendo pequeñas reformas o grandes reformas, algunas han sido comentadas, pero son veintidós reformas parciales en veinte años.

La Ley Orgánica tiene 42 reformas parciales y muchas de esas reformas están referidas a la Justicia Penal, no todas, obviamente, porque se han modificado y creado estructuras de justicia civil, justicia de apremios, defensoría.

Como les decía, el único incremento es la creación del Centro Judicial Monteros con un juzgado más, una fiscalía más, una defensoría penal más y un defensor de menores más. Ni Concepción ni Capital, han crecido en su estructura y se mantiene la cobertura de estos cargos que están sin cubrir, pendientes, está la cobertura que son los juzgados de ejecución de sentencia y los juzgados contravencionales que descomprimirían la sobrecarga que tienen los cámaras, los juzgados correccionales y los jueces de instrucción.

A título de ejemplo, ustedes tienen en la nota a pie de página, una comparación que puede ser interesante en esto de los sistemas de crear juzgados qué costo implica a nivel de sueldos, nada más. Crear un juzgado implica: computar el sueldo del magistrado, del secretario, del prosecretario y al menos seis empleados. En una fiscalía son muchos más y si es en Capital, al tener doble turno, ronda las dieciocho personas, entre los cuales cinco son funcionarios. Si ustedes suman los sueldos de todas estas personas que hacen el soporte administrativo de la tarea del fiscal o del defensor, en caso de una defensoría, les da una cifra que repartida en el sueldo de un juez, les permitiría, en vez de nombrar un juzgado nuevo, nombrar al menos cuatro, seis o siete magistrados, sean jueces, fiscales o defensores, con solo variar el esquema de organización a un sistema que priorice el *pool* o colegio de jueces con esta horizontalidad en la organización de los jueces o un sistema de organización diferente a nivel de las fiscalías y las defensorías.

Esto como dato, nada más; obviamente que es opinable y es uno de los modelos posibles.

En la elaboración de este informe hemos participado todos los representantes del Poder Judicial; es un trabajo que se hizo colectiva y cooperativamente. Hay más información disponible, mucha de ella seguramente va a servir para fundamentar los cambios que se propongan ya en concreto en el proyecto que logremos elaborar en forma conjunta.

Tenemos algunas estadísticas que mostrarles para que ustedes vean el reflejo que tiene esto del flujo de casos. Esto está puesto a nivel de porcentajes - lo vamos a dejar a disposición del que quiera verlo luego-; porcentualmente es muy baja la tasa de resolución de casos por vía de sobreseimiento, elevación a juicio y hasta archivo con relación al ingreso total de casos en el sistema; el porcentaje es muy pequeño porque la capacidad de respuesta está muy menguada, no tenemos más posibilidades que no sea o sobreseer o archivar o ir a juicio; no tenemos una serie de abanicos de soluciones posibles.

Y, al mismo tiempo, cabe aclarar que estas estadísticas no son el fiel reflejo de la realidad. Primero, porque no está definida correctamente cuál es la información que es necesario relevar siendo este es un punto a considerar. Para hacer un seguimiento de la reforma posterior hay que tener en cuenta qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Esta estadística mide cuantitativamente ciertos datos pero no establece relaciones ni comparaciones. Un dato a tener en cuenta por ejemplo es lo que se llama en Estadística “*la teoría de las colas*”, cuánto queda como residual de un año a otro que se suma al nuevo ingreso de casos y cómo calcular sobre eso las salidas que tiene el sistema con requerimientos de elevación a juicio, sobreseimientos o archivos o con sentencia de absolución o condena o de sobreseimiento.

Esos son los problemas que tiene el sistema a nivel del análisis y la evaluación del funcionamiento; no hay información disponible que sea certera porque hay informaciones parciales. Y esto existe, y se da, lamentablemente, en toda Latinoamérica y es lo que los especialistas llaman “cifras negras” porque la información no es exacta.

Muchas gracias por la atención y este ha sido el informe; luego lo vamos a pasar a Presidencia para que puedan circularizar esa pequeña corrección y queda disponible la información estadística para ustedes. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el representante del Colegio de Abogados de la Capital.

Sr. García Posse.- Buenas tardes.

En una conversación informal con el Presidente, yo le anticipaba que difícilmente los abogados estemos en condiciones de hacer un diagnóstico como se requería en la orden del día que nos hicieron llegar. Primero, por una cuestión de tiempo; me parecía que el tiempo era breve y me parecía que esto estaba más que nada dirigido a los miembros de esta Comisión que provienen del Poder Judicial. Esto por dos razones: en primer lugar, porque ya vienen trabajando sobre esto; y, en segundo lugar, porque tienen el acceso a la información de la cual no disponemos todos.

Toda esa información estadística que disponen los integrantes del Poder Judicial, en mi conocimiento y mi experiencia, son reservados para la Corte y los miembros del Poder Judicial. Nosotros no accedemos a esa información; no accedemos siquiera a conocer si esa información tiene tratamiento estadístico o son números de

egresos e ingresos o de movimiento de causas. No tenemos acceso a las auditorías que realiza la Corte porque son reservadas.

Quiero decir que, si a la Comisión le parece que pueda ser importante, me animo a hacer el tiempo que se necesita para esa tarea, me animo a hacer una especie de encuesta entre los abogados para ver qué opinan del funcionamiento del sistema pero particularmente de cada uno de los rubros o ítems que nos parezcan que son importantes. Ahora, hacer un diagnóstico completo y perfecto con fundamentos y con sus respectivos anexos, bueno, para eso me parece que la Corte debiera abrir primero la información, que, por ahora, la verdad, no la disponemos; no solo en el caso de la Justicia Penal, porque en este informe, de lo que vengo escuchando, hay situaciones, digamos, en las que probablemente nosotros compartamos todo lo que se dice acá, pero hay cosas que no tienen nada que ver con el sistema inquisitorial, con el modelo inquisitorial o con el modelo adversarial sobre el que estamos queriendo trabajar. Tiene que ver con las deficiencias, a veces estructurales, a veces funcionales o a veces en las fallas de los propios operadores...

Sr. Sánchez.- Ese era el sentido del informe.

Sr. García Posse.- Por eso, me parece en ese sentido, que este informe es un buen comienzo.

Pero quiero decir, que para que todos podamos tener una idea propia para volcarla a la Comisión, o por lo menos hacer un intento de diagnóstico, me parece que todos debiéramos contar con la misma información. Eso es lo que quería manifestar.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el Colegio de Abogados del Sur, doctor Faiad.

Sr. Faiad.- Acá tenemos un breve bosquejo que hemos preparado con el doctor Fara, pienso que será coincidente con lo que puedan manifestar los abogados del Colegio de Abogados del Sur, o el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán, pero son los problemas que nosotros advertimos en el funcionamiento del Poder Judicial de San Miguel de Tucumán y también de Monteros.

La investigación Penal Preparatoria, evidencia, en general, una gran lentitud, con un gran protagonismo del Fiscal de Instrucción. En esa etapa de instrucción, le está vedado al abogado defensor el acceso al expediente, antes de que se produzca la declaración en el carácter de imputado de su defendido. Ejemplos: no obstante haberse practicado un allanamiento en busca de pruebas con resultados positivo y negativo, su

representante letrado no puede acceder a la lectura del expediente. Si el sospechoso es notificado por una demanda por daños y perjuicios, en virtud, por ejemplo, de un accidente de tránsito, su abogado no puede consultar el expediente o la planimetría para ejercer su derecho a defensa.

Este obstáculo subsiste mientras la imputación no se produzca, a pesar de ser importante, por ejemplo, en el caso de la mediación actual y que es una mediación obligatoria previa, antes de iniciar una demanda se hace la mediación obligatoria previa, entonces es importante acceder al expediente para ver si se puede ofrecer un arreglo o no. Esto impide, muchas veces, acá viene a colación el tema del que acaba de hablar el doctor Sánchez, del artículo 80, que dice: *“Toda persona tiene el derecho a ejercer su defensa a partir del momento de la persecución penal dirigida en su contra.”*. Entonces, el hecho de que no se pueda acceder al expediente porque, primero, tiene que declarar como imputado, impide, muchas veces, proponer en forma inmediata una diligencia conducente al descubrimiento de la verdad, evitando la imputación carente de pruebas y que a su vez puede conducir al esclarecimiento del caso. El abogado defensor no puede ingresar a las audiencias de declaración testimonial, mucho menos efectuar preguntas esclarecedoras. El procedimiento actual cercena el derecho de defensa, constituyéndose por esas falencias, en excesivamente perjudicial para la investigación.

En el proceso civil, en sede civil, existe la posibilidad de participar en el acto de declaración de testigos, formulando preguntas, aclaraciones, constituyendo un despropósito, que actualmente, en la investigación penal preparatoria, no tenemos esa posibilidad. En algunos casos debemos esperar ansiosos un debate oral para tener la oportunidad de formular las preguntas al imputado, testigos o peritos, que antes no se hicieron, descubriéndose que el proceso no tendría que haber arribado a esa etapa y mucho menos con la persona privada de la libertad. La inexperiencia, la ignorancia, la falta de sentido común, o la falta de tacto exquisito, le impide muchas veces al instructor, formular las preguntas clave para el esclarecimiento del caso.

Muchas veces, acá tenemos un camarista, en un debate oral uno hace una simple pregunta, y esclarece un caso que termina en absolucón del imputado o en una investigación después, en el futuro, para aclarar y orientar la investigación al sentido correcto.

El testigo o perito debe conocer la seriedad de afirmar una falsedad o callar una verdad ante la autoridad competente; es decir, se debe respetar la excelencia, lo que actualmente no ocurre. Las declaraciones testimoniales carecen de esa formalidad. En

Concepción, las estadísticas indican un solo caso de condena por falso testimonio, habiendo tantas personas.

El abogado debe esmerarse en interrogatorios escritos, cuyos puntos clave, muchas veces, son obviados, evitando la transparencia de la causa y la prosecución de una línea de investigación errada. A esto debe sumarse la ausencia del fiscal en la mayoría de las declaraciones testimoniales o indagatorias, no tomando contacto visual con los testigos o imputados; no conoce los gestos, los movimientos de su cuerpo o lo que transmiten a través de sus relatos, privándose de la posibilidad de acceder de manera directa a una prueba crucial para sostener la acusación o para debilitarla. Su sola presencia en la audiencia le permitiría descartar testimonios muchas veces armados en sede policial, de testigos que simplemente ratifican una declaración distorsionada. Efectivamente, en reiteradas oportunidades el instructor escribió lo que no le fue transmitido por el declarante.

Es por eso y mucho más que el proceso escrito con un protagonismo casi exclusivo del fiscal de instrucción tiene enormes desventajas. La apertura de ese cerrojo beneficiará a querellante, a imputado, a justiciable y al proceso penal en general.

El tiempo en la investigación penal preparatoria. Es común que los plazos procesales establecidos en nuestro Código Procesal Penal no sean respetados. El artículo 346, que establece un máximo de dos meses para investigar, a contrario de la declaración del imputado, constituye letra muerta. Es la realidad ya que no se ejercita la práctica de solicitarle una prórroga al juez de instrucción, de esa investigación que se prolonga tanto en el tiempo.

Ya sabemos que la justicia lenta se transforma en injusticia, afectando con creces a querellantes, imputados o justiciables en general. Son innumerables los casos de imputados que no pueden acceder a un certificado de buena conducta. Este es un problema actual que, de alguna manera, se debe solucionar -no puede sacar pasaporte, no puede conseguir un trabajo-, no obstante de tratarse de causas insignificantes o ya prescriptas.

También se puede mencionar el caso de imputados que recuperaron la libertad por no haberse dictado sentencia dentro de los dos años desde que se dictó la prisión preventiva, y que luego, en el futuro, deben retornar a una celda, a pesar de haber formado una familia y ejercer una actividad lícita. Pareciera ser que el único plazo que debe respetarse es el de diez días a contar a partir de la declaración indagatoria, para requerir la prisión preventiva u ordenarse el cese de la detención.

Es inentendible que el proceso penal se prolongue tanto en el tiempo, a pesar de que muchas veces no estemos frente a un caso de difícil investigación. Es contradictorio que al abogado defensor se le conceda tan solo un plazo de tres días - artículo 365 del Código Procesal Penal- para oponerse al requerimiento fiscal de elevación a juicio, instando al sobreseimiento o a un cambio de calificación. Es un plazo que debería ampliarse ya que la oposición fundada puede desembocar en un justo sobreseimiento o en un cambio de calificación que permita acceder en un juicio abreviado futuro o al beneficio de la *probation*, de la suspensión del juicio a prueba.

Tiempo de apelación. El abogado apela la prisión preventiva, el dictado de sobreseimiento o una restitución provisoria de un inmueble, y luego de haber expresado los agravios debe esperar dos, tres o cuatro meses para que la Excelentísima Cámara de Apelaciones se expida. Bueno, es la única Cámara de Apelaciones que existe en toda la Provincia.

También es contradictorio que, no obstante haberse fijado un plazo tan corto –es un problema que tenemos los abogados de Concepción, que tenemos que viajar para comparecer a manifestar si vamos a expresar los agravios por escrito o si lo vamos a hacer en forma oral-, si el abogado no comparece dentro de los tres días se declara desierto el recurso.

El juicio abreviado, la *probation*. Esperar que un expediente arribe a la Cámara Penal de Juicio Oral para recién poder solicitar la suspensión del juicio a prueba constituye un acto incongruente con la celeridad de los procesos y generador de gastos absolutamente innecesarios. Implementar antes de esa etapa la posibilidad de pedir la suspensión de un proceso a prueba, o de acordar con el fiscal un juicio abreviado, implicará ganar en economía y en soluciones indudablemente prácticas. A eso ya lo acaban de manifestar acá.

En el caso de la *probation* o suspensión del juicio a prueba, el querellante conocerá más rápido las propuestas del imputado y este las pretensiones del querellante; se agilizaría el futuro de la causa civil por la cuestión de la perjudicialidad.

El imputado puede obtener el beneficio y el sobreseimiento sin esperar un largo proceso innecesario como ocurre actualmente, se producen gastos enormes hasta llegar al debate, se abre a prueba el juicio y antes de que se fije fecha de audiencia se produce el pedido de suspensión del juicio a prueba. No debía esperarse tanto.

Con respecto al juicio abreviado, también se deben abrir antes las puertas para su celebración, si existe el acuerdo del imputado, abogado con el fiscal –digamos- para

acordar una pena, luego de una previa y correcta calificación jurídica de la conducta, no debería esperarse tanto.

Es importante advertir que el artículo 453 del Código Procesal Penal emite una limitación al juicio penal abreviado, ya que si seguimos su línea, el acuerdo debe hacerse en base a la calificación legal dada en el requerimiento de elevación a juicio.

Acá es importante señalar que no se deben agravar las calificaciones jurídicas si estas no coinciden con el accionar desplegado por el imputado.

Un fundado juicio abreviado permitirá superar el vallado inserto en el artículo citado, pero su modificación sería algo más atinado, ya que algunos magistrados no aceptan que el juicio abreviado se realice en base a una calificación diferente a la contenida en el requerimiento del fiscal de elevación a juicio. Esto es lo que ocurre actualmente. Hay cámaras que aceptan el juicio abreviado a pesar de que haya venido con una calificación jurídica grave de la imputación penal preparatoria, por ejemplo, una tentativa de homicidio, de repente, digamos, arribando la causa a la cámara, puede el fiscal decir: “no, esta es una lesión leve y no podemos hacer el juicio abreviado, porque viene por tentativa de homicidio”.

A pesar que es un criterio atinado -digamos, lo correcto sería que el fiscal en ese momento, tendría que venir a sostener una acusación en un debate.

Consideraciones finales: Estamos inmersos en un procedimiento burocrático totalmente escrito en la investigación penal preparatoria a pesar de las bondades del sistema adversarial, por ello, lo que nos interesa para esta exposición, es resaltar que sería importante que las decisiones o su gran mayoría, se tomen en audiencias orales donde las partes litiguen o presenten, cuando sea necesario y según el tipo de decisión, sus pruebas y sus argumentos.

Consideramos que es necesario imponer cambios que permitan un funcionamiento más justo y efectivo del servicio de justicia, donde se realicen la mayor cantidad de audiencias y que el juez presencie y dirija las mismas, se simplificarían y abreviarían muchos trámites, pues las partes aceptarían libremente, en base a una discusión pacificadora como la mediación, otras salidas alternativas, el juez debe estar presente escuchando a la víctima, imputado o testigo y tomando decisiones en base a lo que las partes discutieron en presencia de él, por ejemplo, para el dictado de la prisión preventiva. Por supuesto que hay una innumerable cantidad de puntos a los que hay que prestarle atención, pero consideramos que lo mencionado en este breve trabajo también es importante.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Vargas Aignasse.

Sr. Vargas Aignasse.- Señor Presidente: La verdad es que es muy rico el informe que han elaborado los magistrados, y, como decía el presidente del Colegio de Abogados, tienen información muy sutil, muy fina, muy concreta, datos estadísticos que son muy importantes, pero va quedando la sensación con todo esto como si en el año 1991 este código que fue alabado por todo el país, que todos los juristas se llenaban la boca hablando de las bondades del mismo, días atrás buscaba información para ver la opinión que había sobre este tema, sobre esta modificación al momento de que se sancionaba esta nueva ley y todo el mundo jurídico hablaba de que esto era lo mejor, el futuro y el nuevo paradigma y hoy veinte años después escucho a la gente que está en la materia, en el día a día diciendo que prácticamente no sirve para nada.

Entonces, también eso me genera una posición –digamos- ¿cómo es posible que en veinte años esto no haya servido o haya sido un fracaso? porque después de escuchar lo que leían los jueces, los fiscales o el informe que hacía el colega abogado del Sur, me queda la sensación de que estamos ante un perfecto fracaso, un fracaso absoluto, de que esto no ha servido para nada y que hoy la congestión que tiene la Justicia Penal es producto de una mala ley, es producto de un mal Código y me parece que no es tanto. Me parece que no era tan bueno lo que se sancionó en el año 1991 ni me parece que ahora sea tan caótica la situación. Probablemente la situación sea caótica, pero la solución para ese caos no provenga con tirar todo a la basura y traer un nuevo profeta que nos diga: “*Miren, esto es lo que va*”.

No creo que en esas posiciones tan contradictorias, tan extremas, tan sobreactuadas en muchos casos porque ya no creo en los profetas, en las nuevas biblias es difícil. La dinámica nos tiene que enseñar que no existen nuevos profetas, que no existen nuevas biblias, que no existen paradigmas de éxitos absolutos y que lo que se ha hecho no es que no sirve para nada y lo que venga es lo mejor. No, me parece que hay un error si nosotros sostenemos esa posibilidad.

Creo que debemos ser maduros en esto y, en primer lugar, dejarnos llevar por lo posible. ¿Qué es lo posible, qué es lo presupuestariamente posible? Hay algo que me llama la atención: fui Legislador desde 1999 a 2003, después no fui Legislador pero tuve un cargo nacional y, obviamente, seguíamos la política sobre todo vinculada al tema judicial porque uno como abogado siempre tiene el ojo puesto en el funcionamiento de estos temas. Quizás otros políticos que tienen otra orientación técnica o no, o son militantes de la política, evalúan otras cuestiones, pero nosotros siempre estamos atentos a esto. Y la verdad es, , no podría afirmarlo, pero no recuerdo que algún Presidente de la Corte se haya plantado y haya dicho: “*Señores, necesitamos*

más presupuesto para el Poder Judicial, necesitamos más fiscalías, más juzgados”; no lo recuerdo, no lo tengo presente. Y eso también me llama la atención.

Porque si esta ley que en el año 1991 era tan buena, ¿hoy le podemos hacer tantas críticas destrozándola? Uno de los temas es que no hemos podido hacer andar al hermoso auto que teníamos es porque no teníamos para nafta y no hemos ido a pedirla, bueno, nos hagamos cargo un poco de los errores que podrían haber cometido los que tenían el manejo del auto; y veamos ahora si podemos hacerles algunos cambios y ponerle nafta e inmediatamente ponerlo en funcionamiento porque si vamos a tener que esperar hasta que un nuevo profeta nos traiga una nueva historia, ver el presupuesto, que según los chilenos es de millones y millones de pesos, hay que capacitar a todos los trabajadores, a todos los operadores para embarcarnos en una cosa que no sabemos. Porque capaz que hoy decimos que es la nueva Biblia y dentro de unos años diremos que ya no es la Biblia, que es un desastre, que tendremos que ir de nuevo por otro lado como nos ha pasado ahora.

Entonces, señores, veo que vamos demasiado sobre la nueva profecía y acá hay gente que sabe mucho de Derecho y la verdad es que las respeto bastante.

Me gustaría –y lo planteo como propuesta- que primero nos tratemos de reunir un poco más seguido si es posible; sé que todos tienen ocupaciones, por ahí los que somos políticos en algún momento podemos tener más margen, porque nuestra dinámica de trabajo es diferente. Porque si nos vamos a reunir una vez por mes para ver diagnósticos que finalmente no los conocemos, pero que a trazo grueso todos sabemos el problema de esto, será difícil sacar algo en corto tiempo.

Entonces, sería bueno que a estas herramientas las estudiemos en la casa y vengamos a ver qué propuesta inmediata podemos hacer para ver cómo podemos avanzar. Porque si vamos a esperar a hacer una reunión por mes, más las vacaciones, la Feria, más las elecciones, más *pito y flauta*, creo que debemos tener una dinámica más intensa de trabajo y después veamos sobre lo que tenemos, sobre este Código que hoy tenemos, qué podemos modificar para que en lo inmediato podamos dar algún cambio, algún impacto distinto.

Ahora, dentro de poco, estamos por tratar el Presupuesto, lo invito al Presidente que vayamos a hablar con el Gobernador y les digamos: *“Mire, Gobernador, necesitamos más fiscalías, más Juzgados de Instrucción”*.

¿Cuánto cuesta una Fiscalía, según nos decía el fiscal? En el presupuesto de 17 mil millones, que es lo que nosotros manejamos, me parece que no es tan impactante como para no decir: *“che, vamos a aumentar un poquito el servicio, vamos a poner*

más fiscales, vamos a poner más jueces, vamos a crear otra Cámara". Vamos a dar un impacto ya, concursemos el Juzgado de Distribución de Sentencias, o si el criterio es "más importante es lo otro", vamos por donde los jueces y los que están en el Poder Judicial nos digan qué es lo más importante, pero vamos rápidamente a algo, porque si vamos a esperar a una "nueva biblia", no sé cuánto más vamos a estar con esto.

Y ojalá que no se cumpla la profecía de Perón que decía que cuando no queremos que haya un cambio creemos una comisión para que nada cambie. Ojalá que esa profecía no se cumpla y que nosotros realmente podamos avanzar al corto plazo.

Por ahí, oralizando etapas en audiencias, los recursos, todo lo que es el tema de Prisión Preventiva, la apelación de la misma, algunas cosas que las puedo repetir porque puedo leerlas, pero aquí hay gente que las puede explicar de mucho mejor manera que nosotros y podamos avanzar a una primera etapa.

La primera etapa que vamos a hacer es esta, oralizar esta audiencia, creamos más juzgados, más fiscalías y sigamos estudiando, sigamos juntándonos, sigamos escuchando lo que traen, sigamos viendo qué es lo mejor, pero demos un paso concreto en algo porque si no, créanme lo que les digo, hasta que nosotros podamos ponernos de acuerdo, porque además sepan que la "nueva biblia ilustrada" que circula tiene muchos a favor y muchos en contra y poder ponernos de acuerdo en eso va a llevar muchísimo tiempo, acá en los pasillos de Tribunales, en los colegios de magistrados y mucho más en la Legislatura, que es la palabra final en esto

Así que planteo esto, de alguna manera, como moción, señor Presidente.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Caramuti.

Sr. Caramuti.- Yo realmente celebro la intervención del doctor Vargas Aigansse porque una de las cosas que más nos preocupa y de la que algo hemos conversado, es que se crea que esto es la panacea y la solución mágica de todos los problemas del sistema penal y de la inseguridad y es bueno que tengamos conciencia de ello. Ni lo fue el código de 1991 ni puede serlo el sistema que ahora se propone.

Yo no me atrevería a hablar de un fracaso total de la reforma de 1991. Lo que pasa es que es bueno tener utopías, de algún modo ir hacia algún lado, de siempre tratar de mejorar. Uno ahora, visto retrospectivamente, puede hacer -y hace con mucha fundamentación- muchas críticas, más que al Código en sí a cómo se lo ha puesto en práctica. Ustedes han visto que en el diagnóstico nuestro hay muchas cosas que son de práctica de la cosa.

Pero si uno se retrotrae a cómo era antes de la reforma de 1991, el avance fue enorme. Lo que pasa es que nunca hay que creer que esto está terminado ni solucionado, esto es un constante ir hacia adelante; y es bueno que lo tengamos en

claro y con conciencia de los límites y no crear la falsa expectativa tampoco que con esto se soluciona todo porque vamos al fracaso, como bien lo ha dicho el doctor, y lo que menos queremos es que esto vaya al fracaso.

Sí, hay cosas que, como nosotros hemos explicado, que tienen que ver, más que con lo normativo –aunque también lo normativo influye- con lo cultural, con cosas enraizadas. Hay que aumentar, no el número de juzgados o de fiscalías, el número de jueces y de fiscales, porque, como se explicó bien acá, uno de los motivos del fracaso de esto es que se pretende que el juez sea un superhombre, que sea un gran juez, que sepa mucho de Derecho, que además sea un gran gerente, un gran administrador y no puede ser todo eso, el juez tiene que ser juez, tiene que recibir la audiencia, dirigir la audiencia, escuchar las partes, dictar las decisiones fundamentales, eso tiene que hacer el juez. Y todo lo demás tiene que ser toda una apoyatura administrativa.

El problema es que como lo explicó en la parte del informe que leyó el doctor Sánchez, uno piensa: con el viejo esquema, con la vieja mentalidad, hay que hacer un fiscal más, hay que hacerlo con todo su equipo de administrativo, de soporte administrativo. Cuando en realidad si se entienden bien una de las cosas centrales de la reforma que se propone, tiene que haber una oficina administrativa única de gestión, y aumentar sí el número de jueces y de fiscales que tienen que ir a la audiencia haciendo su tarea propia específica. Y lo otro, se ahorra mucho, y lo que se ahorra se puede invertir para lo otro, porque usted ya tiene la oficina de Gestión de Audiencia común a todo; y ello permite una mayor economía de esfuerzo, porque es mucho más fácil coordinar las audiencias, evitando las superposiciones.

Ustedes no saben la frustración que significa para los miembros de los tribunales de juicio, cuando se nos caen las audiencias, se nos cae la audiencia y ya no hay tiempo para poner otra en su lugar y algunos dicen “tres, cuatro días prevista, más o menos de acuerdo a la cantidad de testigos, la cantidad de pruebas...” se cayó en el día de la audiencia, porque no tuvieron en cuenta que justo la fiscalía que le notificaron o el defensor tenía otra audiencia en otra Sala. Y no hay nadie que coordine todo esto. Con una oficina única de Gestión de Audiencia, estas superposiciones se evitan, y no solo se libera parte de la infraestructura administrativa de cada juzgado para que cada juez, cada tribunal y cada fiscalía ejerza su rol propio, con el mínimo indispensable de auxiliares que tiene que tener, pero no para la función administrativa, sino para la función específicamente de acusación, de defensa o de ejercicio de la jurisdicción. Pero, además, porque no se caen audiencias o porque hay menos posibilidades, siempre se van a caer algunas audiencias. Pero yo les aseguro que en general la mitad de las audiencias, por lo menos, se caen, y se caen por cuestiones administrativas que es una

gran frustración, para el Tribunal, para el fiscal, para el defensor, según el caso. Y se caen porque, bueno, pasó, el día de la audiencia cayó, no solo porque se posterga el momento en que se va a proponer la suspensión de juicio de prueba por juicio abreviado, sino por cuestiones de coordinación.

Y si en parte, al margen de las responsabilidades políticas que le puedan corresponder a las cabezas de poder que se han ido sucediendo no se han propuesto, cantidad en la medida debida, nuevas fiscalías, nuevos jueces, es, precisamente, porque se advierte que si lo que hay que crear es todo, no un fiscal más, sino una fiscalía con toda, se advierte que no solo es inmanejable por los recursos que significa, sino porque no tenemos dónde ponerlos, ¿dónde vamos a tener que poner todo ese personal de toda la nueva fiscalía y todo lo demás?

Esto sí supone un cambio que es mucho más profundo, que es un cambio en la cabeza, que es muy difícil para todos, pero que significa tener claro que hasta el diseño edilicio tiene que ser distinto, porque no hay que pensar en tantas oficinas para que esté gente con la máquina de escribir, si no hay salas de audiencia. No podemos poner en funcionamiento este sistema sin salas de audiencias. Y, lamentablemente, los retoques que podamos hacer en el sistema sin esto, también van a estar dedicados al fracaso. Vamos a tener un montón de juzgados con toda la infraestructura, con el mismo sistema y vamos a volver al mismo colapso. Igual esto no significa que cambiando el sistema como en principio se está proponiendo, se vayan a poder procesar en el sistema todas las causas que teóricamente tiene el sistema. Esto tenemos que tener en claro desde el inicio: es imposible. Y si creamos la falsa expectativa de que ello va a ocurrir, *estamos* –discúlpenme por la expresión que voy a usar- *en el horno*, porque dentro de dos meses vamos a estar de nuevo criticando lo que hemos hecho.

Tenemos que tener claro que hay que seleccionar con criterios racionales qué es lo que podemos llevar hasta la última instancia del juicio oral y público con la eventual sanción o absolución, porque también existen las absoluciones, y qué es lo que se puede dar otro tipo de solución y siempre va a quedar un número importante de casos que no van a tener ninguna respuesta, porque no la pueden tener a través del sistema penal. El sistema penal tampoco es la panacea de esta cuestión. Puede procesar determinada cantidad de casos y no más. Y enhorabuena que ello ocurra, porque si pretendiéramos solucionar todos los conflictos sociales con el sistema penal, tenemos que ponernos una serie de barrotes delante de cada uno de nosotros y estamos todos presos.

Lo que signifique el pretender ver en el sistema penal una supuesta magia, un efecto mágico de solución de todos los problemas, los conflictos sociales, significa no solo el fracaso, si no que es en detrimento de derechos y garantías de todos, porque entonces es garantismo, es para protección de los delincuentes; y esto no es para protección de los delincuentes, es para protección de todos los ciudadanos, algunos de esos son delincuentes, también tienen derecho de garantía y hay que juzgarlos con las normas del debido proceso y sancionarlos como corresponde. Pero a todo, es imposible que el sistema penal lo haga.

Sí, me resulta muy valiosa la acotación del Legislador Vargas Aignasse porque nos pone la dosis de realismo de que esto puede significar cambios importantes, tenemos claro que hay cosas que van a ser buenas y beneficiosas pero, con limitaciones. Si pretendemos otra cosa estamos pecando de ingenuidad y generando expectativas que van a llevar a una resolución que puede ser peor y el retroceso también puede ser peor. Eso es lo que quería decir.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Sánchez.

Sr. Sánchez.- Era para hacer un comentario para que quede claro y no transmitir una falsa sensación.

Cuando hicimos un estudio crítico del funcionamiento del sistema, lo hemos criticado al Código en sí, hemos criticado cómo funciona la institución en su conjunto que, en realidad, son varias instituciones que actúan entrelazadas en el sistema de Justicia Penal: la Policía, la fiscalía, los juzgados, las cámaras y los colegios de abogados. Son muchas las instituciones que quedan vinculadas dentro del concepto de sistema de Justicia Penal.

Lo hemos criticado al Código porque ha sido un salto de calidad enorme en el año 1991 frente a un sistema inquisitivo que regía en aquel momento y que era absolutamente inconstitucional. Lo que no ha permitido, lo que no hemos podido hacer, ha sido aplicarlo con efectividad y con eficacia, con eficiencia a ese código tan bueno. Reconozcamos que es obra de los cordobeses que estuvieron en aquel momento en la intervención y ellos reservaron su anteproyecto y luego hicieron modificaciones y recién a los dos años lo hicieron como código.

Sin embargo, en Tucumán pasó inadvertido como primer código durante mucho tiempo, cuando comenzaron a ocuparse de estudiar las reformas procesales penales, advirtieron que no bastaba simplemente con reformas legislativas y eso era lo que no había en aquel momento, pues en 1991 no había experiencias previas que pudieran

servir como parámetro para comparar cómo llevar adelante un proceso de reforma. No fue un error, fue falta de experiencia y falta de conocimiento creado en función de cómo implementar una reforma. Todo eso se fue construyendo y se fue analizando y estudiando en estos últimos veinte años, es más, hasta la OEA se ocupó de eso creando este organismo que se llama CEJA que se dedica a estos estudios, que permitió sistematizar y crear categorías de análisis y promover las mejoras reformas posibles. Pero a esas experiencias no las teníamos en 1991.

Tucumán, tuvo el primer código de sistema acusatorio de toda Latinoamérica, no había con quién compararse, no había información, no había forma de evaluar y teníamos al frente 200 años de sistema inquisitivo y toda una tradición que había que desmontar y no teníamos manera de saber cómo hacerlo, teníamos que hacer camino al andar y en ese camino al andar, las prácticas que eran conocidas, que provenían del viejo sistema inquisitivo, le fueron ganando la pulseada a las nuevas prácticas que nosotros las debimos imponer a partir de ese nuevo código.

Eso fue lo que no logramos hacer, no logramos darle plena vigencia al código en la práctica, no se trata de que sea un código malo, es un buen código, tiene excelentes principios y promovió un cambio cultural enorme pero no suficiente y en esa insuficiencia del cambio que provocó, empezamos a colapsarnos con estos resultados que hoy podemos evaluar porque hay toda una serie de estudios y análisis que nos han dado el conocimiento para poder hacer la evaluación.

No se presenta al código del año 1991 como un fracaso, no ha sido la intención de transmitir ese mensaje, sí reconocer que no tenemos la capacidad suficiente, ni el conocimiento suficiente para hacerlo eficaz y efectivo al sistema creado en torno a ese código. Pensamos que solo con reformar el código bastaba, hoy sabemos que no alcanza, por eso comenzamos la exposición diciendo que las reformas son multidimensionales, abarcamos lo normativo, abarcamos lo organizacional, como bien decía el legislador, la necesidad de fortalecer las estructuras y lo cultural, que es donde están las prácticas, que es el principal problema, que eso se corrige con el tiempo y con capacitación, hay que pensar en un nuevo sistema.

Bien lo aclararon el doctor Caramuti y el Legislador Vargas Aignasse, ninguna solución es perfecta, por eso el esquema de proponer una reforma que permita gradualmente profundizar el sistema con correcciones inmediatas, es una buena estrategia, una estrategia prudente que permite evaluar la eficiencia y la eficacia en concreto, en el terreno de esas correcciones que se plantean y seguir trabajando para proponer la reforma integral que haga falta, en el tiempo que haga falta, y con los

resultados a la vista, porque hacer una reforma integral del Código ya para que dentro de dos años decir “el Código no ha servido”, la verdad es que es un esfuerzo que se tira a la basura y no es lo que pretendemos.

Lo mío era simplemente aclarar esto; nunca se pretendió con el informe desmerecer el Código sino reconocer esa incapacidad que hubo por falta de conocimiento o por falta de experiencia de todos los aspectos que abarca implementar una reforma. Era simplemente eso. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra la doctora Giannoni.

Sra. Giannoni.- Buenas tardes.

Soy fiscal de Instrucción desde hace diez años, y un poco quiero transmitirles la experiencia. He transitado durante esos diez años en distintas situaciones; desde iniciar mi actuación judicial con quince mil causas en la Fiscalía con solamente un secretario, un prosecretario y dos empleados. Después se fue ampliando poco a poco, se puso un ayudante fiscal después de muchos años, pero no encontrábamos mejoramiento de la situación. Después se desdobló el horario de atención al público, de trabajo, dentro de la Fiscalía, tampoco hubo solución. Incorporé el sistema de gestión judicial en mi Fiscalía hace cuatro años con resultados muy buenos porque tengo un control absoluto a través del sistema de gestión, de cuántas causas ingresan y cuántas causas tiene cada uno de los empleados de la Fiscalía, de cuántas causas tengo de 2010, de 2008 -aunque no tengo ya de 2008-; sé a diario con una planilla qué es lo que tengo en mi Fiscalía.

Este personal se ha capacitado dentro de todo lo que podemos para la atención al público y para prestar la respuesta adecuada pero no damos abasto. No se puede dar solución a las víctimas, no se puede ver la cara a las víctimas. Dentro de los puntos que tocábamos y en el informe hablábamos de la atención a las víctimas. No podemos verle la cara a las víctimas; no podemos darle una respuesta eficiente a nadie; estamos con una sensación absoluta de desasosiego e insatisfacción porque no vemos resolución de nada. Por más que elevemos la causa a juicio; no sabemos el resultado de esa elevación de la causa a juicio, va a haber otro fiscal distinto que maneje en otra instancia la causa que hemos elevado a juicio. No sabemos el resultado.

A mí también me encantaría, como decía el doctor, asistir a todas las declaraciones en audiencias y asistir a las declaraciones de los testigos, ver las caras; porque sí comparto totalmente lo que dice el doctor: verlos gesticular, las miradas, las contestaciones, hacer la pregunta adecuada al testigo en audiencia no es lo mismo que

estar firmando las casi trescientas causas que firmo por día. Y no es una sensación, es lo que digo: son números que puedo acompañarlos porque tengo todo registrado con números.

Entonces me encantaría esto que usted dice. Por eso hoy estoy acá sentada tratando de aportar un *maicito* más a esta reforma. Lo que decía el legislador: ha sido un código bueno y se ha hecho mucho camino al andar pero los operadores que lo único que tendríamos que poner -porque hablábamos de los operadores- y el cambio de paradigma es fundamental. Yo creo que todos los puntos que mencionó el Colegio de Abogados del Sur, es verdad y la Fiscalía también quiere tener un fiscal que se aboque a lo que se tiene que abocar: a la investigación del delito, que esté capacitado para la investigación del delito, que no sean fiscalías estancas, en donde yo he tenido casos donde un abuso sexual estaba en mi Fiscalía y no tenía conocimiento de tal abuso sexual, de la misma persona, en la otra fiscalía, que no tenga conexión entre los fiscales.

También quiero un Ministerio Público que me mande directivas para que podamos hacer, estamos los fiscales ocupándonos y archivando, sin el principio de oportunidad, con total arbitrariedad, porque es verdad, decimos: “*esto archivamos*”, “*aquello no archivamos*”, a la víctima no la notificamos de nada. El 60% de las causas van a archivo, con una respuesta de pésima calidad, el archivo; porque si quisieran notificarían a la víctima con la posibilidad de que ella se oponga a su archivo, bueno, sería una respuesta de relativa calidad, pero tampoco eso hacemos. Entonces, nos queda un 40% de causas, que necesitamos ir a audiencia, necesitamos verle la cara al imputado, repito, necesitamos verle la cara al testigo, necesitamos verle la cara al juez, necesitamos continuar con el fiscal que está, que investiga el caso, llegue al juicio, es fundamental. Aunque se haga la política de gestión judicial, como la hago yo, tampoco es posible llegar y satisfacer a la sociedad.

La publicidad. No hay publicidad de nada, la gente, la ciudadanía, cada vez estamos más separados de las necesidades, directamente de la sociedad. Hay un descrédito, por más que el Fiscal de Instrucción -y hoy con todos mis compañeros- trabajemos con ahínco para solucionar estas cosas y para investigar, no tenemos una herramienta necesaria; necesitamos una Reforma. Creo, como decía el doctor, que esto es una *panacea* y no será el resultado final, haremos un camino de todo esto, pero es esencial, porque así no vamos a ningún lado.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Molina.

Sr. Molina.- Muchas Gracias.

Coincido totalmente con el Legislador Vargas Aignasse, obviamente, con el doctor Caramuti, también con lo que acaba de decir la doctora Giannoni y lo mismo con el doctor Sánchez.

Es fundamental, ponernos ya, en forma inmediata, creo que es necesario, como decía el Legislador Vargas Aignasse, el tema de la cuestión presupuestaria. Creo que es urgente que la Legislatura, a pesar de que queremos este nuevo cambio, este nuevo Código, creo que ya es necesario que se cree el Juzgado Contravencional, que se creen la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, la nueva Cámara, y que se cree el Juez de Ejecución de Sentencia.

Pero también debo señalar y decir, que si ustedes vieran como estamos trabajando las Defensorías Penales, esta es una cosa que también presupuestariamente es fundamental y no puedo creer que sea así lo que estamos pasando. ¿Por qué digo esto? Porque el caso de las Defensorías Penales, nosotros, a diferencia de las Defensorías Oficiales Civiles, estas están divididas. Un defensor oficial de la Iª Nominación tiene su secretario, tiene su ayudante, tiene su estructura necesaria, hasta el ordenanza. ¿Qué ocurre con las Defensorías Penales? En estas somos cinco defensores con un secretario cada uno, con un ayudante defensor, con un ordenanza para todos, para una estructura de cinco defensorías, con un teléfono para cinco defensorías, cuando lo lógico y lo correcto es que cada defensor, cada defensoría tenga asignado un teléfono para la comunicación correcta, como debe ser.

Entonces, realmente lo que acaba de decir el Legislador Vargas Aignasse, creo que no tenemos que esperar; la verdad es que con la reforma, estoy totalmente de acuerdo, porque lo que decía la doctora Giannoni, es fundamental, yo he notado congestión ya que es impresionante la cantidad de causas que han elevado a juicio los fiscales. Con el sistema de Gestión Judicial yo no lo podía creer, a mí me llegan todos los días, tengo que contestar, tengo que oponerme para el sobreseimiento, es impresionante la cantidad de causas que nos están entrando ¿por qué? Por el tema de Gestión Judicial, lo cual yo sé que es bueno, pero muchas veces, como dice la doctora Giannoni, son causas que cuando uno ve lo que se eleva a juicio, la calidad de la elevación a juicio, no porque los fiscales eleven mal, sino porque realmente son investigaciones, y a veces, son delitos que no tienen mayor significancia en algunos casos y no son importantes.

Entonces, creo que hay que ver el tema del Principio de la Oportunidad, porque no podemos estar elevando cualquier causa a juicio.

Estoy de acuerdo con la reforma porque el Ministerio Público de la defensa debe ser independiente, una defensa pública fuerte, porque también las fiscalías gozan de

total imperio, y nosotros, los defensores públicos, también tenemos que tener un imperio para poder pedir medidas. Por ejemplo, es increíble que no podamos traer un imputado a nuestro despacho para entrevistarlo sin la previa autorización de las cámaras penales o del juzgado de instrucción, lo que hace totalmente burocrático el sistema. Entonces, el defensor debe gozar de imperio, por eso, sí creo que es necesario este cambio del Código Procesal Penal. Obviamente que coincido en que no es malo el anterior, pero necesitamos un cambio, y propongo que se haga ya efectivo este tema y no lo dejemos pasar. Nada más, gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Hoffer.

Sr. Hoffer.- He escuchado al doctor Sánchez y al doctor Caramuti con muchísima atención, y he tenido la oportunidad de leer el informe, y coincido en un ciento por ciento con todos los puntos que se han ido tratando.

Lo que sí quería recalcar son algunas cuestiones que creo que son importantes, y ahí es donde disiento con respecto a algunas cuestiones de creación inmediata de juzgados y de ampliación presupuestaria, por una cuestión muy sencilla. Aquí se ha hablando de un Código que ha tenido sus fallas, que ha tenido sus críticas. De hecho, Tucumán –todos los que ejercemos la profesión lo sabemos- hoy tiene doble turno, hay más computadoras, notificación vía electrónica; se ha implementado la mediación y la acción de amparo a nivel provincial. Creo que en ninguno de los fueros se ha adelantado absolutamente nada, más allá del trabajo –no me cabe ninguna duda- a destajo de muchos jueces y fiscales que realmente tienen un volumen increíble.

Ahora, creo que lo que estamos haciendo aquí es implementar políticas públicas a prueba. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que esto es parte de un proceso y de una evolución. Creo que tenemos que considerar muy en serio los pasos a seguir. Creo que antes de la creación de una ampliación presupuestaria o de la creación de juzgados, habría que empezar a trabajar muy fuerte en fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque les puedo asegurar –y lo firmo aquí- que por más que creemos veinte fiscalías más o veinte juzgados más, el volumen de trabajo no va a decrecer, porque hoy hay muchísima gente que no denuncia por descrédito a la Policía, por descrédito a la Justicia, y desiste; muchas veces dice: “¡No, qué voy a denunciar si no llega a ningún lado!”. Por ahí, si empezamos a tener un efecto directo con mecanismos alternativos de resolución de conflictos y vamos midiendo metas, objetivos, indicadores, y sobre eso se va proyectando realmente un presupuesto serio con creación de juzgados, con mecanismos que funcionen, creo que ese es –desde mi humilde punto de vista- el camino.

Yo he manifestado en otras oportunidades que a este sistema lo he visto funcionar en algunos lugares hace trece años. Por eso, cuando hago hincapié en la metodología de la implementación, ¡ojo!, corrigiendo errores y volviendo sobre nuestros pasos, porque aquí no hay nada perfecto, nosotros vamos a trabajar siempre sobre el inconformismo constante, sobre lo perfectible. No nos olvidemos de que estamos trabajando con sistemas prácticos. Entonces, lamentablemente, yo puedo poner el mejor sistema, pero si mis operadores, si la ciudadanía..., y hago hincapié en esto, porque acá es muy importante concientizar a la ciudadanía. Hoy la ciudadanía denuncia absolutamente cualquier cosa, los letrados denuncian absolutamente cualquier cosa y hacen abuso de desuso del proceso penal y de las herramientas que les da el procedimiento penal.

Por lo tanto, yo apelo y lo planteo como moción, a efectos de que en todos los caminos sobre los que vamos a ir avanzando, nos manejemos con prudencia. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con el doctor que se tienen que crear más juzgados, pero hay que definir cuántos y de qué forma van a trabajar.

El doctor Sánchez, cuando hace unos meses atrás me manifestó las necesidades operativas para la implementación del plan piloto, realmente he quedado, no sabía dónde estaba parado, porque eran de imposible cumplimiento; por lo tanto, yo quiero que esto funcione por el bien de la ciudadanía y porque me interesa como funcionario, como abogado y como ciudadano que el esquema sea exitoso.

Así que lo planteo y como les digo, creo que hay que hacer fuerza y hay que trabajar sobre un procedimiento en la metodología, haciendo hincapié en los mecanismos previos filtrando, le tiro esto a los fiscales que saben mucho más que yo, les puedo asegurar y ustedes saben, doctores, si nosotros frenamos, cuando me refiero a frenar, resolvemos de manera temprana los conflictos, que son los conflictos vecinales y barriales que son los que nos abarrotan los juzgados. Realmente los fiscales van a tener tiempo de resolver las cosas importantes y trabajar de forma mucho más directa con la víctima, que es algo fundamental, no porque hoy lo estemos planteando, sino porque hoy a nivel mundial, Naciones Unidas plantea el problema del acción penal no desde el punto de vista del delito en sí, sino desde los derechos de las víctimas. Nada más. Gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Regino Racedo.

Sr. Racedo.- También voy a ser breve, porque me parece que el doctor Vargas Aignasse ha planteado algunas cosas que han modificado el eje de discusión de la reunión.

Entiendo el ánimo y la urgencia que tenemos, la verdad es que escucharla a la doctora Gianonni suplicar por alguna reforma que pueda permitirle en su fiscalía poder mejorar el servicio de justicia, excede de cualquier comentario que los demás podamos hacer, porque ella tiene la vivencia diaria y la imposibilidad diaria de atender ese reclamo. Pero creo que debemos tener en claro los objetivos que tenemos como comisión, porque en el ánimo de poder generar respuestas rápidas, como está en el ánimo del señor Vargas Aignasse, pero yo me pregunto: cómo lo planteamos a eso ante la sociedad, nosotros que representamos a distintos estamentos y estamos sentados en esta mesa, digo, la última gran reforma al código estamos hablando del año 1991, estamos a más de veinte años, probablemente estemos haciendo un trabajo para los veinte años que vienen.

Entonces, me parece que sí tenemos que tener una visión global y trabajar en una reforma global, amplia, donde sí coincido con el doctor Vargas Aignasse que por ahí podemos acelerar un poco los tiempos, reunirnos un poco más seguido, ponernos más a trabajar, más allá de que cada uno tiene que seguir con su tarea atendiendo la defensoría, la fiscalía, el juzgado y cada uno en su función, pero me parece que el producto del trabajo de esta comisión tiene que ser una reforma global que queda establecido más allá de la coyuntura que tenemos cada uno para los próximos años en nuestra Provincia.

Respetuosamente, creo que este no es el ámbito para tratar el tema presupuestario ni es competencia de la comisión, y me parece que hasta por ahí podría ser una falta de respeto a la independencia que siempre proclamamos de los distintos poderes, en este caso del Poder Judicial que la comisión vaya a hacer un planteo respecto a cuestiones presupuestarias, ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Pienso que están los mecanismos institucionales para que cada Poder administre sus fondos. Lo que sí quería plantear es la necesidad de avanzar en una reforma global.

En las pocas oportunidades que he tenido de conversar con el Presidente sobre el tema, me parece que está bien encarado el trabajo porque desde algo tenemos que partir. Entonces lo lógico y razonable era que empecemos con el trabajo planteado que ha hecho el Poder Judicial, que seguramente no será definitivo, podrá tener las modificaciones que los miembros de la Comisión o de los distintos sectores estimen pertinente.

También era importante que todos los miembros de la Comisión –sobre todos los que no pertenecemos al Poder Judicial- conociéramos más en detalles cuál era el espíritu de esa reforma planteada y sobre qué estábamos hablando. Es un criterio personal, absolutamente respetuoso del suyo, Legislador Vargas Aignasse, pero creo ha

sido todo un proceso que nos podamos sentar a la mesa los distintos sectores. Y en el ánimo de dar respuestas rápidas podemos equivocarnos.

Entonces, aunque nos demoremos un poco más, que el resultado –para mí es importante- sirva para los próximos años en Tucumán. Nos demoremos unos meses más, unos meses menos, que la reforma sea la base del trabajo y quede para la próxima década en la Provincia. Nada más.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Caramuti.

Sr. Caramuti.- Me parece que, al margen de las imposibilidades y de las dificultades del Colegio de Abogados de Tucumán, que son perfectamente comprensibles, no creo que esto se deba trabajar exclusivamente sobre el diagnóstico de los jueces porque los abogados del Sur han hecho un diagnóstico que en muchos aspectos es bastante coincidente, he notado que parecería que con distintos lenguajes, con distintos criterios nos hubiésemos puesto de acuerdo en cuanto a algunas dificultades y a algunos déficits que también para el ejercicio de la Abogacía se presentan.

Coincido que en ciertas cosas no hay que apurarse para evitar incurrir en un nuevo fracaso, pero a lo mejor deberíamos distinguir cosas que sí requieren un tiempo más de análisis para buscar una reforma global, porque pienso que esto debe tender a una reforma integral. Y otras cosas donde también se pueden dar respuestas puntuales de coyunturas bastante concretas, donde no creo que sea introducirnos en cuestiones específicas de uno de los poderes porque todas las decisiones requieren de la intervención de todos los poderes y por algo esta Comisión es intrapoderes en algunos aspectos, acá hay miembros representantes del Poder Judicial, representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Ejecutivo donde algunas cuestiones dependen de una coordinación entre todos.

Por ejemplo, el tema puntual, no la creación, sino la puesta en funcionamiento de los jueces de ejecución y los jueces contravencionales es algo que la verdad no se justifica esperar una reforma integral, es una necesidad advertida absolutamente por todos y que el Poder Judicial solo no lo puede hacer, habría que llamar al Consejo de la Magistratura, que se supone funciona en la órbita del Poder Judicial, entonces no podríamos llamar a concursos si después no vamos a tener cómo darle la partida presupuestaria.

Por eso, creo que la Comisión puede de algún modo volcar cuáles son las necesidades que se van gestando y que pueden tener una respuesta ya, como hay otras respuestas que no, que requieren, obviamente, de una cosa más concienzuda, que requieren algo más de tiempo. A lo mejor hay otras cuestiones que dependen de los operadores concretos.

Hay muchas cosas que en el Código Procesal actual no son obstáculos para que los jueces hagamos y que algunos tribunales hacemos, otros no; nosotros mismos debemos concientizarnos que hay cosas que podemos hacer.

Por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba es una institución valiosa que está en el Código de fondo, que tiene varias finalidades: una es descongestionar en parte el sistema y otra es propender a la solución del conflicto.

El Código no prevé, a diferencia del Código nacional, la posibilidad de hacer una audiencia para tratar de tramitar y solucionar y dar una respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, no hay ningún artículo en el Código que lo haga y los principios propios del Código mismo de oralidad, como ese artículo 133 que nosotros mencionamos en el informe y que se lo toma como una cosa accesoria y circunstancial y ciertos principios propiamente ulpianos, no nos permitirían a lo mejor a todos los tribunales del mundo, oralizar esto. Nosotros en nuestra sala lo estamos haciendo y con muy buenos resultados.

A lo mejor, no todas las cosas requieren esperar también a la reforma, pero creo que hay cosas en las que hay que ser prudentes, que no sea la existencia de una comisión multipoderes una muy poderosa excusa para decir que esto no se haga. Creo que todos venimos con la idea que tenemos que hacerlo, que algo hay que hacer, porque está claro que así el sistema no está funcionando bien y no estamos dando desde ninguno de los sectores la respuesta que la ciudadanía espera y hay otras cosas que pueden empezar a implementarse ya. Y en esas cosas creo que sí están dentro de nuestra órbita.

Sugería recomendar algunas cuestiones que podrían, a través de cada una de las patas de las que depende esto, instrumentarse en un plazo más próximo, más breve, empezar a dar respuestas posibles e ir avanzando en lo otro de la reforma global que es la reforma global que es necesaria, siendo conscientes, por supuesto, de los límites. Insisto, esto es importante que lo tengamos en claro porque si no, nos vamos a frustrar y vamos a frustrar, a su vez, a la ciudadanía que está esperando de nosotros una respuesta.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el Legislador García.

Sr. García.- Para aclarar un poco, me parece que el Legislador Gerónimo Vargas Aignasse ha omitido algo que sí está claramente presupuestado, los juzgados de Ejecución y Sentencia figuran en el Presupuesto que se está ejecutando en la Provincia,

el problema es que nunca se ha llamado a cubrir los cargos. Esa es una decisión política que el Poder Ejecutivo viene postergando desde hace varios años.

Me parece que yo acompaño la iniciativa de que rápidamente se pongan en funcionamiento los juzgados de Ejecución y Sentencias como también el aconsejamiento a que la Legislatura avance en las nuevas normas que hagan al Código Contravencional. Así que me parece que es una asignatura pendiente que tenemos, que es importante resolver.

Pero hay algo en lo que me quiero detener y que tiene que ver con algo que se ha nombrado como denominador común, que es la palabra “sensación”. Me queda la sensación como que esta reforma que se está debatiendo y discutiendo, no viene del consenso de los distintos sectores que operan en el Poder Judicial, sino que deviene de una acordada de la Corte y que inclusive ha dado lugar a la formación de esta Comisión porque se pretendía incorporar este proyecto de reforma sin la participación de una ley como la que se requiere. Sin embargo, lo que más me parece importante es que, independientemente de la postura que van asumiendo los distintos sectores que integran esta Comisión, me parece que tenemos que focalizar el asunto en la búsqueda del mayor consenso posible a las reformas que se pretendan aconsejar de esta Comisión al Poder Legislativo.

En ese sentido, señor Presidente, voy a proponer, como lo tiene previsto el reglamento de esta Comisión, que se convoque para la próxima reunión a una Audiencia Pública para que puedan participar los distintos sectores y toda la sociedad, porque haciéndome eco de las palabras del Presidente del Colegio de Abogados de la Capital que hablaba de hacer una encuesta, que sería una suerte de consulta, me parece también que el mecanis

Por último, me parece que tenemos que poner mucho el acento en que el resultado de la labor de esta comisión, sea el resultado del mayor consenso posible, no que quede como que se ha impuesto una reforma porque, bueno, no es una panacea. Pero la verdad es que a mí me aterra escuchar que cuando estamos hablando del sistema penal, donde se pone en riesgo el bien máspreciado que tiene el ser humano, que es la libertad, nosotros creamos que *“bueno, vamos a ver y veamos qué puede pasar...!* Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que tratar de llegar a tener mayores certezas y tratar de reducir los márgenes de error para que pasados veinte años no tengamos que encontrarnos con la angustia de que tuvimos la oportunidad, “había una fiscal que pedía a gritos que por favor hagamos algo...” Y nosotros, bueno, hemos intentado hacer algo, porque pensábamos que este proyecto piloto que se ha desarrollado en algunos países podía andar y bueno, lo intentamos.

Me parece que tenemos que trabajar y creo que es la mayor apertura que tenemos que tener todos, que esté basado en la búsqueda del mayor consenso posible, que nos permita llegar a una reforma que sí achique la distancia entre la sociedad y los operadores del Poder Judicial, porque la verdad es que yo escuchaba también que se habla de que lo importante sería nombrar más jueces, más fiscales y no tantos juzgados.

Y la verdad es que cuando escucho que se habla de una única oficina administrativa...y nosotros vivimos en Tucumán, y yo no quiero que un secretario tenga más poder que el fiscal o que el juez, honestamente. Pero en los hechos termina sucediendo que dadas las grandes cantidades de causas que tienen, terminan siendo los secretarios de los juzgados o de las fiscalías los que tienen mucho más poder.

En ese sentido, me parece que cuando más certeza y más claridad le podamos dar a la sociedad, creo que vamos a ir cumpliendo con aquello que hablábamos al principio de la primera reunión, cuando incluso se discutía la participación de los medios y es que el pueblo sepa de qué se trata. Me parece que ese es el camino que tenemos que ir transitando en la búsqueda de que la sociedad se reencuentre con la mejor administración de justicia posible.

Para finalizar, señor Presidente, se que está previsto en otro punto del Orden del Día, pero para aportar también al debate le voy a ceder el uso de la palabra al doctor Pedro Brito, a quien he propuesto para que sea asesor de la Comisión.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor García Posse, primero.

Sr. García Posse.- Lo mío creo que es breve.

A partir de este diagnóstico que trajeron los representantes del Poder Judicial, y despejado, digamos, lo que es la definición de a qué sistema queremos ir, y en el diagnóstico en lo que se refiere a cuestiones funcionales, operativas, atribuibles a los operadores o a las deficiencias o los defectos del trabajo mecánico diario. Me parece que ya en la segunda reunión hemos hecho, de algún modo, una especie de profesión de fe, respecto del sistema al cual queremos ir. Hablábamos de que vamos adelante porque todos estamos de acuerdo en ir a un sistema que tenga mayor publicidad, vamos adelante profundizando el modelo acusatorio, toda una serie de definiciones que han sido muy importantes y que me parece que están fuera de discusión.

Esto es a raíz de todo lo demás que está puesto acá y que no tiene nada que ver con eso. Y, sobre todo, quiero volver a lo que dijo la doctora Gianonni para separar dos tipos de cuestiones que me parece que nos plantean un par de desafíos que los

debiéramos anotar desde ya. Me parece que estamos llegando ya a un punto que es inevitable. ¿Cómo hacer para que en el nuevo sistema no caigamos en lo que estamos ahora? Y estamos hablando, en base a lo que decía la doctora Gianonni y en base a lo que está expresado con mucho más detalle acá.

Nosotros estamos en el punto en el que estamos, no porque el sistema actual no fuera bueno o no haya sido bueno, porque por supuesto, todos sabemos que ha sido superador, estamos acá, básicamente, porque los operadores del sistema hemos hecho que el mismo no funcione adecuadamente como debió o por lo menos deje de funcionar como debió y estamos acá, en segundo lugar, porque tenemos defectos, fallas y limitaciones hasta materiales.

Eso nos lleva, en primer lugar, con capacitación, tratando de comprometerse, a que los operadores vayan acompañando este proceso –y tendríamos que ver la manera que podríamos no tener garantías, pero podríamos ir en un camino más o menos correcto.

Con respecto a lo segundo, obviamente, si nosotros desde ya diseñamos un sistema que tenga insuficiencia de defensores y de jueces, que la defensoría no está suficientemente atribuida de condiciones materiales, me parece que estamos condenando al fracaso pero a corto plazo.

No le tengo miedo a las cuestiones presupuestarias, en primer lugar, porque como decía el Legislador Racedo, creo que no es problema nuestro, es un problema del Poder Judicial, o en todo caso de los legisladores que sancionan la ley de Presupuesto, pero, en segundo lugar, porque también sé que las cuestiones presupuestarias a veces no son suficientes si no de una elección de cómo se gasta, porque el gasto del presupuesto público es parecido al gasto de la casa, uno decide en qué gasta y en qué no, porque la plata nunca alcanza para todo.

Doy como ejemplo –no es por replicarle al doctor Caramuti sino ponerlo como ejemplo- el tema de la Coordinación de Audiencia. Digo yo, ¿qué le impide a la Corte o que le viene impidiendo todos estos años, construir una oficina de coordinadores de audiencia en el sistema actual? porque eso no tiene nada que ver con un sistema adversarial ni con el modelo acusatorio, esa es una cuestión de administración, en cambio la Corte, por ejemplo, prefiere crear una oficina de Informe Público, que está siempre vacía, no hay a quién informar, pero tiene secretario, prosecretario, etcétera. Y no se le ha ocurrido, tal vez porque nadie se lo ha propuesto, crear una oficina coordinadora.

Quiero decir con esto, que el tema presupuestario también es relativo. Cuando hablaba la doctora Gianonni, nos explicaba que prácticamente le han duplicado la cantidad de personal, tiene dos secretarios, dos prosecretarios, pero sigue siendo sola, es la única fiscal y tiene que firmar 300 causas por día. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la cuestión presupuestaria? si tal vez lo único que falta es un lugar físico y otro fiscal y no tanto personal vespertino, que cuando haya un solo fiscal para atender todo eso estamos exactamente en lo mismo y lo mismo pasa en todos los lugares en dónde se habilitó el horario vespertino.

Volviendo a esto, creo que deberíamos encarar las próximas discusiones, en primer lugar, en cómo darle un poco de velocidad a esto y me refiero a velocidad, ya al trabajo más concreto respecto del Código Procesal y paralelo de las modificaciones que fueran necesarias a la Ley Orgánica.

En segundo lugar, mientras vamos avanzando en eso, vamos atendiendo estos dos problemas: ¿cuál es la estructura material y humana que tiene que tener el nuevo sistema? y en eso creo que corremos con ventaja si apuntamos solamente a Concepción y Monteros porque es una escala más chica, como decía el doctor Sánchez. Una cuestión de escala, entonces – más allá de los problemas presupuestarios y edificios_ siempre va a ser un poco más chico y lo vamos a poder atender.

Pero me parece que debiéramos ver la manera de cómo empezar ya con la elaboración del proyecto y preocupándonos para que no nos pase, por lo menos lo que ya nos pasó, tenemos dos problemas que nos están prendiendo las luces amarillas, bueno, no nos tiene que pasar lo mismo. Eso es todo. Nada más.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el señor Legislador Páez.

Sr. Páez.- Dado lo avanzando de la reunión, voy a exponer esquemáticamente.

Primero, creo que no hay ninguna duda de que este sistema por el que hemos hecho una opción por el sistema adversarial, fundamentalmente porque nos brinda rapidez, la posibilidad de mayor rapidez en la causa, que es el requerimiento de la sociedad.

En segundo lugar, quiero expresar mi satisfacción por las conclusiones del diagnóstico que usted ha leído, con alguna salvedad; me parece muy bien y me adhiero al planteo del Colegio de Abogados en el sentido de la posibilidad de acceder a las

estadísticas, que no solo no puede acceder el Colegio sino también operadores del propio Poder Judicial.

En tercer lugar, el tema del Presupuesto. Ojo que por Constitución, antes del 30 de octubre el Poder Ejecutivo tiene que elevar el proyecto de Presupuesto a la Legislatura. Tengo entendido que hasta el momento no lo ha hecho. Previo a enviar al Presupuesto, como lamentablemente el Poder Judicial no es autárquico como estaba planteado en la Convención Constituyente y en varios proyectos de ley...

Sr. Racedo.-No se puede enviar el Presupuesto si no está aprobado el presupuesto nacional; usted sabe eso, siempre se espera la aprobación del presupuesto nacional...

Sr. Páez.- Hay una obligación constitucional hasta el 30 de octubre; y no me interrumpa.

El año pasado, la Corte remitió una propuesta para el Presupuesto 2013 y después no fue satisfecho; creo que hubo algunos reajustes pero yo creo que no es ajeno a que esta Comisión, porque creo que es un clamor general, que se mejore el presupuesto, no solo para la implementación de un nuevo sistema sino para ir solucionando problemas que son urgentes.

Por otro lado, obviamente, los juzgados de ejecución de sentencia y los juzgados contravencionales, sin perjuicio de apurar el ritmo desde la Legislatura para aprobar el nuevo Código Contravencional, creo que hay que implementar la ejecución, la puesta en funciones y que el Consejo Asesor de la Magistratura llame a concurso.

Por último, aquí se hacía referencia a que si disminuye la conflictividad en la sociedad vamos a tener menos dificultades. Pero, bueno, eso depende de las políticas públicas que se las debe plantear el Poder Ejecutivo. Quizás en lo que se refiera a lo legislativo tendrá que tratarlo la Legislatura y lo demás es rol del Poder administrador. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Brito, como una excepción; ya que los asesores debieran asesorar a los miembros de la Comisión.

Sr. García.- También tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra.

Sr. Brito.- Buenas tardes.

Yo soy estrictamente abogado litigante con algunos asesoramientos públicos, conjuer federal, y todo en la materia penal; en mi vida no hice otra cosa que litigar en materia penal.

He escuchado los informes y he visto que todo se circunscribe a una eventual practicidad, pero nos estamos olvidando de la constitucionalidad. La solución alternativa de conflictos como una consecuencia del principio de oportunidad, que se busca instaurar en la Provincia de Tucumán, no debemos dejar de tener presente que es un instituto propio del derecho sustantivo, del derecho de fondo, es potestativo del Congreso Federal. Y la prueba de ello son todos los ejemplos que reiteradamente los escuchamos en esta misma Comisión, la suspensión del juicio a prueba, el juicio abreviado. Si están reglados en el Código Penal es porque es potestativo del Congreso Federal. Y a la vez tiene un fundamento lógico, que todos sabemos la importancia que tiene la lógica para el Derecho para arribar a las conclusiones del tema decidiendo de cada caso en particular.

Partamos de una premisa válida. Por ejemplo, nuestro Código Penal es punitivo, pongamos otra premisa válida para llegar a una conclusión válida. La punición la impone el Congreso Federal, que es el que tiene la potestad de dictar el Código Punitivo en virtud de un mandato constitucional que dimana del artículo 75, inciso 12) de la Constitución Nacional.

Entonces, es lógico y racionalmente jurídico, entender que el único órgano que puede suprimir, restringir, limitar o extinguir la punición, es el Congreso Federal, que es quien lo impone, no puede imponer el Congreso de la Nación una punición en uso de facultades constitucionales y nosotros, desde la Provincia de Tucumán, crear una norma jurídica que extinga esa punición. Me refiero, concretamente, al tema de que está reglado.

Tenemos dos prohibiciones legales, una de naturaleza civil y otra de naturaleza penal, para imponer la solución alternativa del juicio en un proceso penal.

Uno dimana del artículo 842 del Código Civil, que también lo dicta el Congreso de la Nación en uso de facultades constitucionales, artículo 75, inciso 12). El artículo 842, es expreso en prohibir a las partes, y estamos hablando del proceso civil, digamos, las partes solo pueden concertar acuerdos sobre el aspecto pecuniario emergente del delito, no así en lo inherente al delito. Tenemos una prohibición del Código de fondo, y la otra prohibición surge del artículo 59, del Código Penal, que establece cuatro modos de extinción de la acción y de la pena y no podemos, desde Tucumán, crear otro modo por acuerdo de partes. Es decir, sabido es que el principio de oportunidad se lo está utilizando, no legalmente pero con un efecto nefasto al día de hoy, de que, por ejemplo, la celeridad, eficacia y eficiencia de nuestro Código Procesal Penal, que es

profundamente acusatorio, surge en cuanto a la finalidad y objeto de la investigación de los artículos 305 y 306, que deben ser cumplidos por los operadores penales. Y en cuanto al plazo, es taxativo al establecer que la investigación penal preparatoria deberá culminarse en un plazo de dos meses.

Nuestros operadores penales al día de hoy ni siquiera piden prórroga; tengo casos de investigación penal de hace dos años y seis meses, los tres plantean que se resuelva el caso concreto porque nunca habían pedido prórroga y recién se acordó el operador penal de pedir prórroga, y el juez, que ya deja de ser garantía porque están fenecidos todos los plazos procesales, ya se debe pronunciar por elevarlo o sobreseer, porque así lo dice nuestro Código, que es acusatorio y totalmente contradictorio, en cuyo tópico también me opongo a lo adversarial, porque si por vía del sistema adversarial está proponiendo una mediación, en todo caso sería recomponer o de concertación o de acuerdo, porque ahí no hay adversarial.

El tema, para usar la terminología correcta, yo sugeriría que debemos ajustarnos a lo que utilizan los tratados internacionales, es la contradicción, no es otra cosa que la contradicción. Y en cuanto a la oralidad, estoy totalmente de acuerdo y ojalá todos, hasta los cobros de ejecutivos, se puedan hacer el día de mañana, en forma oral. Pero sí, no se deben prescindir de las actas, porque también está creado como forma probatoria, es un instrumento público por imperio 979 del Código Civil, y está en el artículo 7, de la Constitución Nacional, establecida como una potestad indelegable del Congreso de la Nación, establecer por reglas generales, el sistema de pruebas en todos los procedimientos judiciales. O sea, no podríamos nosotros, desde San Miguel, tratar de establecer un sistema, por ejemplo, de evidencias, que la evidencia refiere a una cosa, que la certeza total, plena y absoluta es una cosa, pero el Código Penal regula hechos, no cosas. Hay una discordancia, por no decir incongruencia, entre lo que se propone y lo que tenemos dentro del marco constitucional.

Entiendo que el sistema de desechar actuaciones porque no se pueden resolver todas, es violatorio de la Constitución, porque si partimos del precepto fundamental que la justicia es dar a cada uno lo suyo, la víctima de un juicio por más de un delito, por más bagatela que fuera, que para algunos podrá ser bagatela, pero para ellos no porque puede ser de fundamental importancia, lo que se debe hacer es crear el ámbito jurídico donde se resuelvan esas cuestiones de bagatela, y yo entiendo que se debe hacer en la Justicia de Paz Letrada, que debiera ser con competencia penal en los delitos de acción privada, contravencional y de faltas. Así, creo que descomprimos el 50% de la instrucción.

Pero, a *contrario sensu* de lo que propone la investigación de dar agilidad a la instrucción, primero hay que descongestionar la salida del proceso, donde concluye

formalmente por la vía de sentencia en las cámaras de juicio, en los tribunales de mérito. En ese tópico habría que crear el juez de ejecución de sentencia y sustraerle toda esa actividad de cobro de honorarios, de la ejecución de sentencia, porque cada juicio terminado, si termina en condena, no es que termina el proceso; asumen otro proceso por varios años más, según sea la condena.

Entonces, entiendo que merece un estudio mucho más profundo, y adecuar el Código que tenemos, que es profundamente acusatorio, a las necesidades sociales, porque no nos olvidemos que el Derecho Penal, que no es meramente de conflicto – como dice el proyecto-, es la necesidad de un Estado en un momento determinado. Para mí, eso es el Derecho Penal. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

Sr. Presidente (Caponio).- Están anotados para hacer uso de la palabra el Legislador Vargas Aignasse y el doctor Caramuti, y se cierra la lista de oradores.

Tiene la palabra el Legislador Vargas Aignasse.

Sr. Vargas Aignasse.- Señor Presidente: Como decía el doctor Hoffer, él habla de mecanismos alternativos para resolver conflictos, que a partir de eso no sería necesario, inclusive, crear fiscalías y juzgados. Bueno, ¡bárbaro!, si él tiene una idea, si tiene una receta, si tiene algo que nos permita avanzar, pero urgente, vayamos a buscarlo y que lo haga ya, lo propongamos ya. Me parece muy bueno.

De todos modos, hay una cuestión que es aritmética. Si nosotros tenemos veinte causas por año y tenemos diez fiscalías, y, bueno, van a atender en promedio dos cada una, pero si tenemos veinte, van a atender una cada una, con lo cual va a tener más eficiencia. Es una cuestión de lógica pura, de recta razón, digamos.

En cuanto al tema presupuestario, yo recuerdo la reunión que tuvimos con el Presidente de la Corte, con Regino Amado, y con nuestro presidente de bloque sobre la idea de que sea una comisión multipoderes, multiestamentaria, era precisamente eso, de que cada pata pueda ir articulando el mecanismo necesario para que podamos avanzar. Ahora, si nosotros vamos a trabajar para una reforma que, probablemente, lo más seguro, todos sabemos que vamos a necesitar ese Presupuesto, y si no contamos con el mismo, va a ser una falta de respeto, una vergüenza, y decir: “*Mire, señor Gobernador, mire, señor Presidente de la Corte, necesitamos...*”; entonces, pidamos permiso para ver si podemos pedir y recién avancemos. No me parece irrespetuoso o desconsiderado pedir Presupuesto para poder avanzar con esto. Todo lo contrario, es parte de lo que hemos logrado al ser esto multidisciplinario.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados planteaba que no es problema nuestro si no hay Presupuesto. No, sí es problema nuestro, porque los miembros de la Comisión somos nosotros. Nosotros no podemos hacer el papelón de

trabajar dos años y después decir: “*No, no sirve de nada porque no tenemos Presupuesto*”. La experiencia nos indica que tenemos que ir avanzando en todos los frentes para lograr el objetivo. Tenemos presupuestados los juzgados, ya tenemos la plata, que es la gran pelea que se da, pero no está la decisión política de llamar a concurso. Ese también es un error nuestro. Hagamos una autocrítica. Hay alguien que no quiere, evidentemente, dicen que es un miembro de la Corte el que no quiere, que no le gusta, que le parece que es un tema administrativo.

Señores, veamos cómo podemos avanzar. Esto no es atropellar, llevarse por delante a nadie, pero realmente pongamos proa y empecemos a cumplir metas, y nos pongamos objetivos a corto, mediano y largo plazo, y le demos un poco más de vértigo y dinámica a esto, porque el año ya se va, nos quedan dos reuniones más, si seguimos con una por mes; enero, febrero, pasamos a marzo, y ya siete u ocho reuniones más y se nos ha ido 2014. Esto va a tener un quiebre de memoria inexorablemente, porque en algún momento si no resolvemos esto, los legisladores que estamos ahora, no vamos a estar, algunos no estarán, otro sí, pero va a haber un quiebre de memoria que también va a frenar un poco el proceso. También habrá funcionarios que también ya no van a estar, todo puede pasar.

Sr. Presidente (Caponio).- Tiene la palabra el doctor Caramuti.

Sr. Caramuti.- Quería decir algo en referencia a las objeciones que ha hecho el doctor Brito al cual respeto mucho. Me parece muy valioso que él haya fundamentado jurídicamente y desde la Constitución su posición.

Sin pretender tener la verdad en cuestiones que jurídicamente son opinables, la cuestión acerca de si el régimen de ejercicio de la acción penal es una cuestión que hace al derecho de fondo o que hace al régimen procesal propio de las legislaciones procesales, es un tema, por lo menos, discutido y largamente, pese a que durante mucho tiempo se sostuvieron casos sin objeciones y sin discusiones sobre la posición que ha expuesto el doctor Brito. Pero no son los criterios que se van imponiendo modernamente; incluso muchos tratadistas que en algún momento sostuvieron esa posición como el propio doctor Zaffaroni están desandando un poco sobre esos criterios, y analizando la historia de dónde viene este supuesto principio de oficialidad y legalidad poniéndolo seriamente en duda.

El artículo 75, inciso 12 que ha mencionado el doctor Brito y que efectivamente faculta al Congreso de Nación a dictar el Código Penal dice: *sin que tal código altere en las jurisdicciones locales correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales*, y qué es lo que esto significa, es una cuestión discutible porque claramente no surge de la Constitución, porque lo que surge en claro de la

Constitución es que el Congreso dicta el Código Penal, lo que no surge de la Constitución ni expresa y a mi modo de ver ni implícitamente, es que el régimen de ejercicio de la acción sea una cuestión que tenga que estar en el Código Penal, que histórica y tradicionalmente haya sido, no quiere decir que esto sea así. Es más, en muchos proyectos de Código Penal se incluyó también la materia contravencional, y no obstante la tendencia predominante es que esta es una cuestión claramente local, y en algunos códigos penales se pretendió en algún momento incluirlo.

El régimen, a mi modo de ver, no es una cuestión que haga al Código Penal, es una cuestión que hace al modo que las provincias aplican los códigos, no es que en Tucumán vamos a inventar la pólvora y vamos a ser los primeros que estableceremos por ley, pero sí creo que tiene que ser por ley. En ese sentido discrepo que pueda ser por acordada. Es mi opinión. Creo que tiene que haber una ley en sentido formal para establecer el principio de oportunidad.

Habría que ver si hace falta esperar a la reforma global o también se lo puede hacer parcialmente, habría que estudiar y analizarlo, pero en las provincias que antes lo han establecido, que son varias, ha habido planteos constitucionales y estos han sido rechazados. Entonces, es un tema, no solo discutible, sino que hay precedentes judiciales que han rechazado los planteos de orden constitucional que los cuestionan.

La verdad es que en estos momentos no los tengo a los precedentes, pero puedo buscarlos para traerlos a la próxima sesión para que lo incorporemos al debate. No quiero que abramos una polémica ahora, sino que quería dejar como que estamos consintiendo lo que es una posición respetable, es bueno que lo pongamos también en el debate, porque creo que hay que discutirlo todo, y creo que también, no sé si será en la próxima reunión o tal vez en otra, pero sí creo que el tema de la Audiencia Pública que propuso el doctor García, es un tema que sí lo tenemos que incorporar. Lo que sí creo es que esta creación de una oficina judicial no va a implicar para nadie más poder que los jueces, el poder de los jueces es el poder de decidir en los conflictos y con el actual sistema de delegación sí se diluye el poder de los jueces y de los fiscales. Entonces, con esto se quiere evitar que la función propia de los jueces y los fiscales sea delegada. Ese es el espíritu de lo que planeamos y, por supuesto, todo está sujeto a discusión. Gracias.

Sr. Presidente (Caponio).- Para cerrar quiero dar las explicaciones de que era necesaria esta reunión donde tanto los operadores del Poder Judicial, como los del Colegio de Abogados, expongan sus puntos de vistas sobre cuáles son las falencias del sistema para poder hacer un diagnóstico y avanzar en una reforma total.

El objetivo de esta Comisión es ese, creo que es un objetivo muy ambicioso y que realmente va a depender de nuestra voluntad. Acá no hay ningún profeta ni ninguna Biblia que esté sobre la mesa, sino que hay un proyecto sobre el cual se está trabajando, aprovechando el tiempo y la inversión que se ha hecho sobre todo en lo intelectual y tomando como base ese plan para poder avanzar en el nuevo Código Procesal Penal, que no hay ninguna duda en esta mesa que es necesaria su reforma, ya sea parcial o total. Lo que surge de esta mesa es que es necesaria una reforma total, porque es necesario para una mejor administración de justicia.

La reunión de hoy era necesaria, era necesaria que los operadores judiciales sepamos, sobre todo, cuáles son los problemas. De ahora en más, la dinámica de esta Comisión va a tornar sobre los puntos precisos, sobre los puntos normativos para tratar de avanzar en un Código nuevo, que va a llevar su tiempo. No nos hemos establecido ningún plazo para la vigencia del mismo.

Acá están en juego muchos intereses, sobre todo decisiones políticas que es necesario consensuar para que el Código que se elabore sea aplicable y no sea solamente un deseo ideológico.

Y respecto al tema de los Asesores, que creo que es fundamental, pediría a cada uno de los miembros presentes que hagan llegar a Presidencia el nombre de las personas que deseen incluir como tales. También había propuesto el señor Legislador Vargas Aignasse, digamos, que lleven un trabajo paralelo los asesores y así poder acelerar el trabajo de la Comisión.

Y en cuanto a la audiencia pública, creo que sería el próximo paso y habría que fijar una fecha para realizar, tomando como antecedente -lo había manifestado la última vez- la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que todas las personas interesadas realicen una ponencia en equis cantidad de páginas en una exposición pública de cinco minutos ha sido muy positiva. Y acá, en la Provincia, hay muchas personas que también pueden hacer su aporte. De este modo abrimos la Comisión a toda la ciudadanía.

Una fecha razonable sería en el mes de diciembre para poder acomodar, sobre todo, la recepción de los trabajos de las distintas personas. Es una cuestión pendiente que se lo puede resolver en la próxima reunión de la Comisión y mientras tanto ir adecuando los recursos necesarios para una audiencia pública.

Sr. Caramuti.- Digamos, con la reglamentación de funcionamiento.

Sr. Presidente (Caponio).- Así es. Hay una reglamentación que les voy a hacer llegar por *mail*, tomando como antecedente lo de la Nación. Es una ponencia, se inscriben vía

internet, se les asigna un turno y la Comisión recibe la audiencia con una exposición de cinco minutos.

Sr. Páez.- 10 minutos.

Sr. Presidente (Caponio).- O 10 minutos. Por eso hacen una presentación por escrito obligada y una ponencia de 10 minutos.

Sr. Caramuti.- Sería bueno que circularicen.

Sr. Presidente (Caponio).- Vamos a circularizar para que estén al tanto.

La próxima reunión, conforme al reglamento de la Comisión, es la segunda semana del mes de noviembre; o sea, si es necesario y los miembros de la misma proponen una reunión anticipada queda a decisión de la Comisión.

Muchas gracias por estar presentes.

-Es la hora 19:50.